

# AMÉRICA LATINA, ENTRE MOVILIZACIÓN Y DERECHIZACIÓN

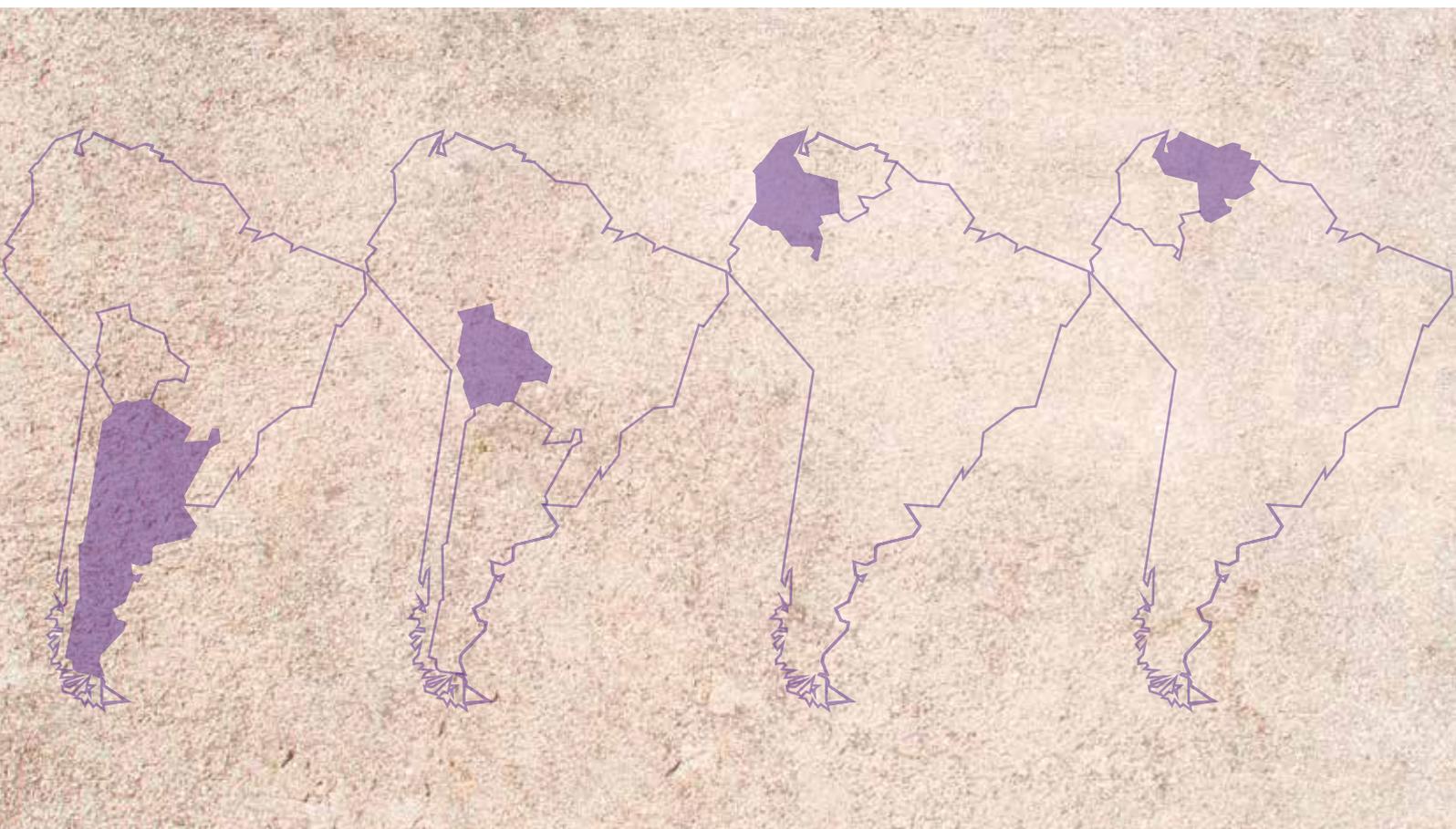
Cuatro análisis de país

Maristella Svampa

Luis Tapia

Donka Atanassova

Edgardo Lander



# TEXTOS DE TRABAJO DEL GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO SOBRE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

Autores:

Maristella Svampa

Luis Tapia

Donka Atanassova

Edgardo Lander

Publicado por:

**Fundación Rosa Luxemburg**

Oficina Países Andinos

Miravalle N24-728 y Zaldumbide

Telefonos: (593-2) 2553771 / 6046945 / 6046946

email: [info.andina@rosalux.org](mailto:info.andina@rosalux.org)

Quito · Ecuador

Corrección de estilo: María del Pilar Cobo

Diseño de portada: h2ostudio. Carla Aguas

Diagramación: h2ostudio. Carla Aguas

Publicado en mayo de 2017

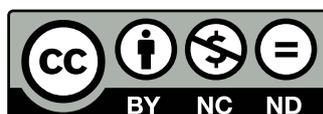
GRUPO PERMANENTE  
DE TRABAJO SOBRE  
**ALTERNATIVAS  
AL DESARROLLO**



Fundación  
**Rosa Luxemburg**



Este documento es de distribución gratuita, fue auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburg con fondos del Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el desarrollo (BMZ)



# ÍNDICE

## Contenido

<b>Argentina: Conflictos y reconfiguraciones sociopolíticas durante el ciclo kirchnerista</b> <i>Por Maristella Svampa</i>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Análisis de Bolivia</b> <i>Por Luis Tapia</i>	<b>29</b>
<hr/>	
<b>Análisis Colombia: Algunos aportes a la lectura de cambios en la configuración social y política en los últimos 15 años</b> <i>Por Donka Atanassova I.</i>	<b>41</b>
<hr/>	
<b>Notas para una reflexión colectiva sobre la situación venezolana</b> <i>Por Edgardo Lander</i>	<b>58</b>

**ARGENTINA: CONFLICTOS  
Y RECONFIGURACIONES  
SOCIOPOLÍTICAS DURANTE  
EL CICLO KIRCHNERISTA**

---

Maristella Svampa

# Argentina: conflictos y reconfiguraciones sociopolíticas durante el ciclo kirchnerista

Maristella Svampa<sup>1</sup>

Agosto de 2016

En este texto sobre el ciclo kirchnerista me ocuparé de cuatro temas. En primer lugar, me referiré a los cambios en la estructura social argentina en los últimos 15 años. En esa línea, es importante subrayar el fortalecimiento de actores sociales que habían sido castigados en la década anterior, como por ejemplo las clases medias urbanas y los sectores populares (trabajadores formales e informales), proceso ligado al crecimiento de la economía, la expansión del modelo industrial y el incremento del consumo. Sin embargo, cabe destacar que, como en otros países latinoamericanos, los sectores altos se vieron muy beneficiados por el ciclo kirchnerista.

En segundo lugar, daré cuenta de las grandes transformaciones rurales, a partir de la expansión y consolidación de un nuevo modelo agrario (agronegocios, particularmente soja transgénica), hecho que

trajo como correlato la emergencia de nuevos sujetos rurales globalizados, aunque no desligados de la vieja oligarquía agraria. En esa línea, cabe destacar además la expansión de actividades extractivas y megaproyectos, así como la profundización de la transnacionalización de la economía argentina, que vino acompañada de un mayor protagonismo de las empresas transnacionales. Estos dos últimos procesos explican también el ocaso, arrinconamiento y, en algunos casos, transformación de sujetos sociales ligados a otros modelos agrario-productivos.

En tercer lugar, me referiré al campo de las movilizaciones y movimientos sociales, y me focalizaré en los conflictos centrales del ciclo kirchnerista, tales como el enfrentamiento entre las corporaciones agrarias y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y las movilizaciones de las clases medias (por y contra el kirchnerismo). Luego me referiré a las periferias, esto es, las movilizaciones por fuera del campo binario, ligadas a la expansión de las fronteras del extractivismo y el acaparamiento de tierras.

---

1. Maristella Svampa es socióloga, escritora e investigadora. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia). Investigadora principal del Conicet y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Forma parte del Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo.

En cuarto lugar, hablaré brevemente del escenario político actual y de las luchas sociales. En este sentido, importa aclarar que, en consonancia con otras experiencias del continente, el kirchnerismo tuvo una gran productividad para monopolizar el progresismo como espacio de centro-izquierda y expulsar otras fuerzas políticas. Al mismo tiempo, promovió una interpretación del conflicto en clave dicotómica o binaria, al visibilizar algunos conflictos sindicales (diversidad sexual, medios de comunicación, patronales agrarias), y expulsar de su radio de tratamiento y lectura a otros conflictos (megaminería, acaparamiento de tierras, impactos sociosanitarios del modelo sojero, incluso el narcotráfico, entre otros). Esta situación se mantiene, pese a los reveses que el kirchnerismo está enfrentando, sobre todo en el ámbito judicial.

### **1. Estructura social y económica. Recuperación de posiciones y vuelta a la 'normalidad'**

Los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad argentina durante el ciclo kirchnerista (2003-2015) son de diverso orden, tanto en la estructura social como de los sujetos sociales emergentes en la dinámica de conflictos. En este apartado resumiré brevemente los cambios y reconfiguraciones de las clases medias, de los sectores populares y de los sectores dominantes.

Para comenzar, hay que decir que la Argentina de los últimos 15 años registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y de la recuperación del consumo. Hay que tener en cuenta que las clases medias (urbanas), más allá de su heterogeneidad social, han jugado un rol

central en la configuración de un imaginario acerca de 'la excepcionalidad argentina', como un país más homogéneo, más igualitario, respecto de otros países latinoamericanos más marcados por la distancia social o las grandes desigualdades. Sin embargo, esta representación se quebró durante la década de los noventa del siglo pasado, cuando, en un marco de polarización social, la Argentina vivió un retroceso de las clases medias, visible en la fragmentación intracase y en un fuerte proceso de movilidad social descendente. Esto se tradujo en el empobrecimiento de vastas franjas (sectores medios autónomos y asalariados).

---

**La Argentina de los últimos 15 años registró un fortalecimiento de las clases medias, a partir del aumento de la ocupación, del incremento de los salarios y de la recuperación del consumo.**

---

Provistas de un importante capital cultural, pero debilitadas en términos de capital económico y aspiraciones sociales, las clases medias fueron las grandes protagonistas de las protestas sociales durante 2001 y 2002, que derribaron a varios gobiernos. Por ello, en los últimos 15 años, esto es, durante la postconvertibilidad y con el ingreso al consenso de los *commodities*, el mejoramiento de sus posiciones económicas y el acceso al consumo no se vivió como una suerte de 'democratización' (como sucedió en otros países, por ejemplo, en Brasil), sino como la

‘recuperación’ de un estándar de vida y de patrones de consumo, perdidos en la década anterior (Kessler, 2016).

En esta línea, una segunda transformación asociada a la reactivación económica fue el mejoramiento de la situación de los trabajadores formales, gracias a la generación de empleo y al crecimiento económico. Asimismo, hubo una reducción de sectores marginales y grupos no calificados respecto del período anterior. Nuevamente, hay que tener en cuenta lo sucedido en el período anterior, cuando amplios sectores de la clase trabajadora urbana sufrieron un proceso de descolectivización y pasaron a engrosar parte del proletariado marginal (trabajadores informales o precarizados) o simplemente quedaron desempleados. La descolectivización masiva estuvo en el origen de una serie de movimientos de desocupados (piqueteros), que, entre 1997 y 2004, se constituyó en el gran actor social del conflicto en la Argentina, mediante cortes de ruta en todo el país y la reorganización del tejido social en los barrios populares.

En suma, el período de postconvertibilidad ilustra, al menos hasta 2011, una reversión de la tendencia dominante en la década anterior respecto de los sectores populares: aumento del empleo calificado de 17,5 % a 33,8 %, y creación de puestos de trabajo en la industria hasta 2006 y en la construcción, y luego en el sector servicios (Benza, 2016). Pero si el sector de trabajadores manuales calificados experimentó una notable mejoría y creció, la reducción de trabajadores no calificados y marginales fue menos significativa. Ciertamente, al menos hasta 2007 hubo una fuerte creación de empleo (unos 5 millones de puestos de trabajo, luego de la crisis de 2001-2002), hecho que si bien implicó una recuperación

de la industria, no conllevó cambios sustantivos, pues “quedó también reinstalada la misma estructura industrial dependiente y vulnerable del pasado” (Katz, 2013).

El crecimiento de la economía y el aumento del empleo y del salario contribuyeron a una baja sustantiva de la pobreza, respecto de 2001-2002, cuando llegó al 52 %. En 2007, según informaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza se había reducido al 20,6 % de la población, mientras que la indigencia era del 5,9 %. Asimismo, durante los 12 años de kirchnerismo se mejoró la situación de los jubilados. A partir de 2006 se amplió la cobertura previsional, que permitió a unos 2,5 millones de jubilados recibir una pensión a pesar de no haber hecho aportes. El kirchnerismo retomó la tradición democrática de paritarias libres (convenios colectivos de trabajo), perdidas durante el neoliberalismo, lo cual mejoró el salario de los trabajadores formales, públicos y privados, al compás del desplazamiento del conflicto sindical hacia el área laboral. Esto reubicó a los sindicatos de trabajadores formales como actores centrales del conflicto y, desde el punto de vista simbólico, volvió a generar cierta confianza de clase, visible en la recuperación de un ‘modelo productivo’ asentado en el trabajo, en contraposición al modelo financiero de los años noventa. La Confederación General del Trabajo (CGT), tradicionalmente peronista, volvió a unificarse y encolumnarse detrás del peronismo/kirchnerismo, bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe de los camioneros, uno de los sectores más beneficiados por las políticas de los noventa (a raíz del desmantelamiento de los trenes).

También es interesante observar lo sucedido respecto de la precarización: pese

al aumento del empleo formal, las tasas de empleo informal continuaron siendo altas (alrededor del 30 %, cuando en 2001 era del 48 %). Por un lado, hubo una extensión del universo de la precariedad, mediante la subcontratación y tercerización, sobre todo en el área de servicios. Así, en el marco del aumento de la conflictividad sindical, no fueron pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas contra la precarización, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Entre estos se destacaron el sector de servicios y transporte. Conflictos como el que ocasionaron la muerte de un militante de izquierda, Mariano Ferreyra, asesinado en una protesta contra la precarización laboral, en 2010, mostraron el costado más sombrío de la expansión de nuevas formas de desigualdad dentro los sectores trabajadores urbanos.

---

**No fueron pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas contra la precarización, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas.**

---

Otros conflictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia fueron protagonizados por el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria) en varias provincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la

precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la Policía provincial, así como las constantes pujas en otras provincias, revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos de nacionalizar los conflictos.

Por otro lado, ha persistido un núcleo duro de trabajadores en posiciones marginales (la marginalidad, tema mayor de las ciencias sociales latinoamericanas), sostenidos en parte por los diferentes programas sociales que fortaleció el Gobierno, en continuidad con las anteriores políticas gubernamentales. Este presenta particularidades según sexo, pues es más alto en las mujeres que en los varones; según edad, afecta sobre todo a los jóvenes, y según nivel educativo, ya que su incidencia disminuye a medida que aumenta este nivel. Respecto de las políticas sociales, en relación con los sectores más vulnerables, en 2009 se sancionó por decreto la Asignación Universal por Hijo (unificando y reemplazando así los otros programas sociales), una medida promovida desde hace varios años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, cuyo impacto sobre los sectores más excluidos fue importante, aun si su alcance estuvo lejos de ser universal.

Por último, respecto de los sectores altos de la sociedad, estos mejoraron sus posiciones durante el kirchnerismo, aunque hubo modificaciones, entre las cuales debemos consignar cuatro fundamentales. Primero, hubo un desplazamiento del capital financiero (típico de los noventa), hacia el capital productivo y extractivo (oportunidades que abría la reactivación de la industria,

nuevo capitalismo agrario y expansión de las fronteras del extractivismo). Segundo, hubo una acentuación de la concentración y extranjerización de la economía: el proceso de extranjerización de los noventa se fortaleció a partir de 2004, con la reactivación del mercado interno, dominado por oligopolios, lo cual se vio potenciado, en el marco del consenso de los *commodities*, por la acentuación de la extranjerización en las actividades extractivas (petróleo, megaminería). Así, en la actualidad el perfil de la cúpula empresarial se destaca por la notoria presencia de firmas extranjeras.

Tercero, luego de la crisis de 2001-2002, y durante los primeros años del kirchnerismo, los sectores dominantes optaron por adoptar una estrategia de 'bajo perfil', que consistió básicamente en reducir la ostentación, típica de la era menemista. Sin embargo, a partir de 2004, la reactivación del consumo y la inversión repercutió en un afianzamiento del estilo de vida ligado a la segregación espacial (urbanizaciones privadas) y a los consumos de lujo. Para decirlo de otro modo, con el 'retorno a la normalidad', las clases altas volvieron a recuperar la seguridad ontológica, esto es, la confianza en sí mismas, que había sido amenazada con la crisis y el *default* (2001-2002).

Cuarto, y relacionado con lo anterior, el período se caracteriza por la expansión del nuevo paradigma agrario (agronegocios), el cual ilustra la emergencia de un nuevo perfil empresarial, cuya fusión con la vieja oligarquía agraria se haría cada vez más ostensible, a medida en que el modelo de agronegocios fuera afirmándose como hegemónico. En suma, más que cambios de en los sectores dominantes, en Argentina asistimos a la emergencia de un nuevo *ethos* empresarial, ligado a los agronegocios

(al menos, como modelo identitario), que reforzó la seguridad ontológica de los sectores dominantes como 'motor' de la economía argentina. Eso se hará notorio en la expresión genérica de 'campo', que alude a la nueva estructura agraria y denota la reasociación de la bonanza económica con el imaginario del país agrario.

---

### Las clases altas volvieron a recuperar la seguridad ontológica, esto es, la confianza en sí mismas, que había sido amenazada con la crisis y el *default* (2001-2002).

---

En suma, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en las condiciones de trabajo, ingreso y consumo de los sectores subalternos. Esto llevaría a afirmar a estudiosos como G. Kessler (2016) que dichas mejoras habrían marcado una reversión de las tendencias propias de los años noventa (la sociedad excluyente, Svampa, 2005), o sea, que habría habido un quiebre de la polarización social, si se compara con el período anterior. Sin embargo, dicha reducción de la pobreza no conllevó una disminución de las desigualdades. El mejoramiento de las situaciones de los sectores subalternos fue notorio, al menos, entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación con los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas. No obstante lo anterior, como es sabido, en sintonía con los últimos

estudios sobre desigualdad en la región, es necesario relativizar las afirmaciones triunfalistas acerca de la reducción de los niveles de desigualdad, operadas durante la década progresista. Así, al contrario de lo que se venía afirmando de que América Latina era la única región del mundo donde había disminuido la desigualdad, dichas investigaciones (centradas en las declaraciones fiscales de las capas más ricas de la población) muestran que, al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.<sup>2</sup>

Volviendo a la Argentina, más allá de los impuestos a las exportaciones agrarias y, a partir de 2008, a las mineras (entre 3 % y 5 %), durante el período no se registró ninguna reforma tributaria que implicara avanzar sobre los beneficios de los sectores más poderosos. Todo lo contrario, el Estado siguió subsidiando a las empresas de servicios y de la producción, e incluso en los últimos años comenzó subsidiar a las petroleras, que amenazaban con despidos masivos, frente a la baja del precio internacional del bruto y la pérdida de ventajas comparativas. Por otro lado, el sistema tributario continúa siendo opaco, complejo y regresivo (la reducción del impuesto a las ganancias ha sido uno de los reclamos mayores de los sindicatos, porque afecta incluso a salarios medios y bajos; el IVA es del 21 %); el capital financiero no ha sido gravado ni existe un impuesto al juego (que ha tenido notable expansión en el período). Además, la nueva Ley de Tierras no afecta

al proceso de extranjerización (no es retroactiva). Por último, a diferencia de otros países latinoamericanos, la reforma agraria es un tema ausente del debate.

---

**Al compás de la disminución de la pobreza, la región ha conocido una concentración mayor de la riqueza.**

---

## **2. Las transformaciones de la estructura agraria. Núcleo y periferias**

En líneas generales, se podría decir que en Argentina existen por lo menos tres universos agrarios: el mundo claramente hegemónico de los agronegocios; el mundo chacarero, otrora central en clave de economías regionales, aunque nunca hegemónico, y el históricamente marginalizado mundo campesino-indígena. Desde el punto de vista agrario, las lógicas de estos mundos son ciertamente diferentes, hasta contrastantes, así como la densidad, la extensión y las relaciones de asimetría instalados entre ellos.

Comenzaré por el mundo hegemónico. Existe una vasta y rica literatura que da cuenta de la emergencia del sector de los agronegocios, caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías, de acuerdo con estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), lo cual colocó a la Argentina como uno

---

2. Véase el número especial de *Nueva sociedad*, sobre todo el artículo del economista Pierre Salama, '¿Se redujo la desigualdad en América Latina? Notas sobre una ilusión', 2015; disponible en <http://nuso.org/articulo/se-redujo-la-desigualdad-en-america-latina/>. Para una discusión sobre la forma de medición y su metodología, véase M. Medeiros, P.H.G. Ferreira de Sousa y F. Ávila de Castro, 'Estabilidade da desigualdade de renda no Brasil, 2006-2012. Estimativa como dados do imposto de renda e pesquisas domiciliares', *Ciencia & Saude Coletiva* 20 (4): 971-986.

de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Dichas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario y un salto en la escala de producción, e incrementaron notoriamente su peso relativo en las exportaciones y la economía argentina. Su vertiginosa expansión implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años noventa. El modelo de agronegocios se extendió no solo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, y ocupa en la actualidad unas 22 millones de hectáreas (sobre 33 millones cultivables), de las cuales el 90 % está dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (2002, gracias a la devaluación de la moneda local), así como por al *boom* de los precios internacionales de productos primarios.

Según Grass y Hernández (2013), las características actuales del modelo de agronegocios (que por supuesto incluye, además de la soja, otros cultivos transgénicos como el maíz, girasol, algodón y otros), serían las siguientes: transectorialidad (integración vertical y horizontal), priorización de la producción para la exportación, intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios (y creciente peso del capital financiero), estandarización de las tecnologías utilizadas y acaparamiento de tierras para producción a gran escala.

El nuevo modelo agrario cuenta con diferentes actores: mientras que en el sector semillero se encuentran las grandes

empresas multinacionales del sector (como Monsanto, Novartis, Singenta y Cargill)<sup>3</sup> y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos. Entre estos se encuentran los terceristas (que cuentan con el equipamiento tecnológico), los contratistas, suerte de 'productores sin tierra' (entre las cuales se incluyen actores extraagrarios, como los *pools* de siembra y los fondos de inversión), y, finalmente, los pequeños y medianos propietarios, parte de los cuales se convirtieron en rentistas, que alquilan sus propiedades para el cultivo de la soja. Por otro lado, la expansión del modelo de agronegocios produjo el surgimiento de organizaciones empresariales vinculadas al sector agroindustrial, entre las que se destacan la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), así como organizaciones por cadenas. Estas últimas, a diferencia de las tradicionales (SRA, Federación Agraria Argentina o Coninagro), presentan una integración vertical que abarca desde la producción primaria hasta sectores de servicios ligados a la nueva trama productiva.

A nivel local, desde el proceso de liberalización, apertura y desregulación iniciado en 1996, en el período neoliberal se abrieron nuevas oportunidades para las grandes empresas, lo cual favoreció la concentración en términos horizontales y verticales. Así, por ejemplo, el 90 % de la venta de aceite refinado de girasol está en manos de seis empresas, que lideran Molinos Río de La Plata, Aceitera Deheza y Cargill.

---

3. Monsanto controla el 90 % del mercado de semillas transgénicas; Novartis es la primera empresa agroquímica en el mundo.

Asimismo, la expansión del nuevo modelo agrario se tradujo en la disminución del número de explotaciones y la reducción de mano de obra, lo cual generó un fuerte éxodo de la población rural hacia las ciudades. Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) confirman la concentración de tierras: el 2 % de las explotaciones agropecuarias representa el 50 % de la tierra; mientras que el 57 % de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen solo el 3 % (cit. en Aranda, 2013). La mutación y reconfiguración del sector contribuyó a crear un modelo de 'agricultura sin agricultores'.

Por otro lado, la emergencia de una nueva configuración social significó también un cambio profundo en las subjetividades y actitudes de los sujetos. Para algunos especialistas, el agronegocio aparece vinculado a un nuevo tipo de empresario rural, "más de tipo schumpeteriano" (Gras y Hernández, 2009), que asocia las modernas tecnologías con la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Sobre este nuevo actor, ha habido un fabuloso trabajo de instalación/reinvención identitaria, realizado por instituciones del sector, por los suplementos rurales de los principales diarios argentinos y por el INTA, que ha promovido 'la segunda revolución de las Pampas'. Para Gras y Hernández (2009), que analizaron el 'nuevo *ethos* empresarial', el 'empresario innovador' ya no se identificaría con el productor, menos aún con el agricultor tradicional, sino con un estilo y una cultura gerencial basada en la flexibilidad y polivalencia cognitiva, propia

del *management* moderno, orientada a la economía global.<sup>4</sup>

El pasaje dramático de un paradigma agrario a otro muestra una Argentina que ha ido perdiendo diversidad, al compás del avance del monocultivo de la soja y el acaparamiento de tierras. Una de las problemáticas de las últimas décadas ha sido la desestabilización y ocaso del mundo chacarero pampeano (vinculado a la agricultura y la ganadería), caracterizado por una diferente organización del trabajo y la producción, así como por otro sistema de valoraciones y disposiciones psicológicas, respecto del actual modelo de agronegocios. Este proceso de mutación y desgarramiento de las identidades se expresó también en los diferentes posicionamientos asumidos por la Federación Agraria Argentina (FAA), que nuclea a los pequeños y medianos propietarios rurales. Así, en tanto organización gremial, la FAA participó en las actuales transformaciones que conllevaron el ocaso del mundo chacarero que esta representaba. En razón de ello, al menos hasta 2008, adoptó una posición más ambigua, donde se filtraba un discurso crítico del modelo de agronegocios. Sin embargo, la confrontación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por el aumento de las retenciones al agro, llevó a la FAA a un cambio de orientación. De modo inédito, la FAA participó activamente de la mesa de enlace con las grandes organizaciones patronales (SRA, CRA, Coninagro), sosteniendo las demandas de un conjunto de actores que rechazaba el aumento de las retenciones al sector. Más aún, lejos de rechazar el nuevo modelo

4. En un extremo, el arquetipo de este modelo sería el exitoso empresario argentino Gustavo Grobocopatel, quien sostuvo en innumerables oportunidades ser un "sin tierras", afirmando con ello que la rentabilidad está ligada más a un conjunto de operaciones que a la capitalización en tierras.

agrario, la FAA buscó en aquella puja con el Gobierno Nacional desarrollar una mejor inserción dentro de este, para obtener mayor rentabilidad. De modo que el año 2008 señaló un 'fin de ciclo' para las aspiraciones críticas de la FAA, que de ahí en más apostarían a la hegemonía del modelo sojero, y se insertaría en el campo político de la oposición al kirchnerismo, al cual inicialmente había apoyado.

Otra dificultad ha sido la histórica invisibilización de la cuestión campesina. Ciertamente, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina la hegemonía del modelo agroexportador conllevó el silenciamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios, considerados subalternos o marginales.<sup>5</sup> Será solo a mediados de la década de los ochenta, con la emergencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que veremos una resignificación positiva del término 'campesino'. Luego se agregarían el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Campesino de Formosa, la Red Puna, entre otros, enrolados actualmente en el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), que surgió en 2003 y forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC). Dichos movimientos tienen como bandera la agricultura familiar,

el derecho comunitario y la agroecología, y, como objetivo, la soberanía alimentaria.

En 2010, el Gobierno Nacional diseñó el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 (PEA2), con el fin de alcanzar las 160 millones de toneladas de granos transgénicos (soja y maíz, en su mayoría) para dicho año (actualmente es de 100 millones), lo cual implicaría mayores desmontes, mayor desplazamiento compulsivo de poblaciones vulnerables, mayores conflictos con campesinos e indígenas, hacinamiento urbano, presión sobre los bosques nativos y pérdida de suelos, entre otros.

---

**En Argentina la hegemonía del modelo agroexportador conllevó el silenciamiento de una heterogeneidad de sujetos sociales agrarios, considerados subalternos o marginales.**

---

Por último, consignaré la situación de los pueblos originarios, tradicionalmente instalados en la periferia de la periferia. En términos históricos, dicha situación remite al rol del genocidio en la fundación del Estado-Nación, hacia fines del siglo XIX,<sup>6</sup>

- 
5. La misma categoría de 'campesino' ha sido poco frecuente. En Argentina hemos conocido pequeños propietarios, productores agrarios, ligas agrarias, e incluso dentro del lenguaje académico se ha hablado de *farmers*, en el marco de ciertas economías regionales.
  6. El esquema interpretativo fundacional sobre los pueblos originarios en la Argentina moderna fue la dicotomía sarmientina *Civilización o Barbarie*, que condenaba a la exclusión y exterminio a las masas consideradas bárbaras (indígenas alzados, montoneras, gauchos y caudillos levantiscos). Respecto de los indígenas, a fines de 1870 la élite política decidió como vía excluyente la opción militar, que se desplegó a través de diferentes campañas: campañas del desierto en 1879, y entre 1881 y 1885, que aplastaron la resistencia de los indios ranqueles y mapuches (La Pampa, Río Negro y Neuquén), y la campaña al Chaco (1884), que derrotó a los indios tobos y mocovíes del Chaco austral y oriental, y aseguró el control de los márgenes del río Bermejo. A esto se sumó la represión de rebeliones indígenas en la Puna y el efecto devastador que la expansión de estancias ovejeras tuvieron sobre los selknam y yamanas en Tierra del Fuego. En consecuencia, la creación de la República se llevó a cabo sobre el genocidio originario, el cual tuvo un efecto demoledor sobre los diferentes pueblos indígenas sobrevivientes de la Argentina (Svampa, 2016).

el cual tuvo además un efecto invisibilizador, que alimentó la -falsa- idea de que en Argentina no había más pueblos originarios. La Constitución argentina recoge, por supuesto, la normativa internacional más avanzada sobre el tema. Asimismo, la reforma constitucional de 1994 introdujo el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, y sus derechos culturales y territoriales.

En 2004-2005, un relevamiento oficial dio a conocer que existían 600 329 personas en Argentina que se reconocían como pertenecientes a un pueblo indígena, y se identificaron al menos 31 pueblos originarios. En el año 2010, el censo arrojó un número superior: 955 135, esto es, el 2,4 % de la población del país (cit. en Binstock y Cerrutti, 2016). La población argentina incluye además afrodescendientes, cuya presencia ha sido igualmente minimizada. Los datos de 2010 arrojaron un total de 149 493 personas, casi todas ellas nacidas en Argentina y un 8 % aproximadamente en otros países del continente (Ibíd, 47).

### **3. Dinámica de conflictos.**

#### **De centros y periferias**

La sociedad argentina de los últimos 15 años se tornó más compleja a nivel de conflictos sociales, lo cual fue diseñando una nueva dinámica entre centros y periferias. En esa línea, en cuanto a los centros, podría afirmarse que hubo un corrimiento hacia el conflicto sindical, marcado por el ocaso de las organizaciones de desocupados y el resurgimiento de las organizaciones gremiales; en segundo lugar, hubo una irrupción de nuevos actores agrarios (modelo de agronegocios) en la escena política.

En tercer lugar, las periferias estuvieron recorridas por los conflictos socioambientales, ligados a la expansión de la frontera minera y petrolera, y los conflictos territoriales vinculados al acaparamiento de tierras. De este modo, la centralidad no tuvo que ver solamente con el tipo de actor social, sino con la geografía del conflicto: en el primer caso se trataba de conflictos rurales y urbanos, visibles en las grandes ciudades y dotados de amplias ramificaciones y articulaciones sociales, con capacidad de ocupación del espacio público en la capital del país. En contraposición, los conflictos ligados al extractivismo más duro (minería, petróleo), y los reclamos de campesinos e indígenas aparecen vinculados al ámbito rural, así como a pequeñas y medianas localidades, lejanas de los grandes centros urbanos y con escasa capacidad de visibilidad en el espacio público de la capital argentina. En consecuencia, el kirchnerismo logró mantener estos reclamos encapsulados en el ámbito local o provincial, algo que fue facilitado también por la falta de articulaciones con los sectores sindicales urbanos, que al menos hasta 2012 permanecieron ajenos a dichos conflictos.

En los apartados que siguen, haré una presentación sumaria de los conflictos principales durante el ciclo kirchnerista.

#### **3.1. Conflicto entre los sectores agrarios y el gobierno kirchnerista**

La continuidad en términos de orientaciones y estilo del gobierno kirchnerista se vio cuestionada por un conflicto que se abrió en marzo de 2008, y cuya evolución y desenlace, cuatro meses más tarde, significaron un rudo golpe para el nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que, a fines de 2007, la nueva

presidenta aumentó las retenciones<sup>7</sup> de las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agrícolas (entre ellos, la soja transgénica), elevándolas a un 35 %. El frente agrario antigobierno logró agrupar tanto a las grandes organizaciones, como a los representantes de los pequeños y medianos productores, quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y *lock-out*), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días.

Con todas sus limitaciones y virulencias, el conflicto sirvió para difundir por primera vez en la sociedad argentina ciertos temas. Así, por un lado, gran parte de los sectores urbanos pudieron asomarse y advertir cuán grandes y profundas habían sido las transformaciones que sacudieron el mapa agrario argentino en las últimas décadas. Más allá del uso genérico e ideológicamente interesado del término 'campo', la Argentina urbana pudo comprobar la heterogeneidad de los actores que componen el modelo agrario. Subrayemos de paso que, en su mayoría, los cortes de ruta que se multiplicaron en el país fueron sostenidos por Asambleas de autoconvocados, compuestas por pequeños productores, cuyo perfil se vio transformado gracias al nuevo modelo. Pero lo importante es que dicho conflicto puso de manifiesto el lugar central del modelo de agronegocios en la estructura económica del país.

Por otro lado, el conflicto fue un parateguas en términos políticos, pues la disputa por la renta extraordinaria fue la piedra

de toque para actualizar de manera plena el legado populista. Tanto la respuesta inflexible del Gobierno como la rápida reacción de sectores de las clases medias urbanas, que salieron a la calle en apoyo de los sectores agrarios, cuestionando el estilo autoritario del Gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición populista: civilización o barbarie; peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. Finalmente, el proyecto del Ejecutivo fue rechazado en el Senado Nacional, gracias al voto decisivo del vicepresidente electo en favor de los sectores agrarios. Como consecuencia, en 2009 el oficialismo perdió las elecciones legislativas, aunque pronto recobró la iniciativa política.

En esta línea, el esquema populista se fortaleció con dos nuevos hechos: de un lado, un nuevo conflicto, generado por el proyecto de la Ley de Medios, que enfrentó al Gobierno directamente con el multimedios *Clarín* (que, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios había sido beneficiado por las políticas gubernamentales). Los debates sobre la nueva ley audiovisual suscitaron también la adhesión de numerosos periodistas y sectores educativos y culturales, que hasta ese momento habían mantenido una relación de apoyo tácito en relación con el kirchnerismo. De otro lado, la muerte repentina de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, terminó por abrir por completo las compuertas al populismo de

---

7. Las retenciones o impuestos a las exportaciones agrícola-ganaderas son un instrumento del Estado que existe desde los años cincuenta, y solo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser restablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento de las retenciones agrícolas, por parte de Cristina Fernández de Kirchner, tenía entre sus objetivos frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno. Recordemos que la inflación del último año ha sido alrededor del 20 %.

alta intensidad (Svampa, 2016) en su clásica versión estatalista. Esto llevó a consolidar el discurso populista binario y las alusiones al pasado peronista, como 'gran relato' re-fundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y los sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, antiperonistas). En este marco, el kirchnerismo amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner–. Agrupaciones como La Cámpora (fundada por Máximo, hijo del matrimonio Kirchner) y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia, tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual, desde blogs, Twitter y otras redes sociales.

Por último, el conflicto sirvió también para dotar de cierta visibilidad a las organizaciones campesinas e indígenas, víctimas del desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el norte argentino. Sin embargo, por paradójico que resulte, las organizaciones que componían el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se alinearon con el oficialismo kirchnerista. En realidad, tal como sucedió con otras organizaciones sociales (sindicatos, expiqueteros, organizaciones de DD.HH., posteriormente, organizaciones

GLTTB), el MNCI también fue interpelado por el kirchnerismo, muy especialmente, a partir de 2005 (cuando se efectuó la cumbre contra el ALCA en Mar del Plata) y luego del conflicto con las patronales agrarias, gracias a los diferentes programas sociales orientados al mundo campesino. Asimismo, a partir de 2008, el Gobierno comenzó a invocar la agroecología como paradigma alternativo, defendiendo la coexistencia entre este modelo con el de agronegocios. Así, la pérdida de autonomía del movimiento campesino habla de su debilidad, pero su situación no difiere demasiado de la de otros sectores vulnerables, beneficiados con políticas sociales de carácter compensatorio, hecho que acentúa la dependencia respecto del Estado y no apunta a una verdadera inclusión y autonomía de los sujetos y las familias.<sup>8</sup>

### **3.2. Clase media contra clase media. La defensa 'de lo popular' versus la defensa 'de la República'**

Apenas un año después de la muerte repentina de Néstor Kirchner, en octubre de 2011, Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida en primera vuelta por el 54 % de los votos y recuperó la mayoría parlamentaria en el Congreso, perdida en 2009 tras el conflicto con los sectores agrarios. Esta abrumadora mayoría contribuyó a consolidar el proceso de concentración de poder en la Presidenta y fortaleció su vertiginoso

8. Uno de los momentos de mayor tensión en la inextricable relación entre movimiento campesino indígena y gobierno kirchnerista fue en noviembre de 2011, cuando Cristian Ferreyra, campesino de la etnia Lule y miembro del Mocase, fue asesinado por sicarios de un terrateniente en la avanzada del modelo de agronegocios. A raíz de ello, con el apoyo de numerosas organizaciones (entre ellos, del entonces oficialista Movimiento Evita), el MNCI impulsó un proyecto de ley que tomaría el nombre de Cristian Ferreyra, para frenar los desalojos rurales por un lapso de cinco años, así como buscar soluciones para las disputas entre el campesinado y los empresarios del agro, para lo cual prevé la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales. Al final del ciclo kirchnerista, no solo no estaba aprobada la ley Ferreyra, sino que además fue asesinado otro miembro del Mocase, en 2012, en las mismas circunstancias, esto es, por un sicario al servicio de un empresario rural.

encapsulamiento sobre sectores de las clases medias. La ruptura de la alianza con el sindicalista líder de la CGT, Hugo Moyano, implicó un abandono de la vía del populismo clásico (la pata sindical como columna vertebral), lo cual conllevó una concentración mayor sobre los aliados provenientes de las clases medias (sectores juveniles y culturales). Así, la base de apoyo sindical del kirchnerismo quedó reducida a un sector de la Central de Trabajadores Argentinos, vinculado a las clases medias (maestros y empleados estatales) y culturales (artistas, intelectuales y académicos).

---

### El kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretendía monopolizar el lenguaje del progresismo.

---

A su vez, este encapsulamiento coincidió con un nuevo quiebre del Gobierno con otros sectores de las clases medias, con los cuales parecía haberse reconciliado, luego del conflicto con las patronales agrarias, según mostraban los resultados electorales de 2011.<sup>9</sup> Por último, fiel a la tradición personalista de la política latinoamericana, el fuerte encapsulamiento del Poder Ejecutivo fue configurando un modelo extremo de presidencialismo,

poco afecto al debate democrático y a la tolerancia a la disidencia. En este contexto de estrechamiento de las alianzas sociales, el kirchnerismo terminó por convertirse en un populismo de clases medias que pretendía monopolizar el lenguaje del progresismo, al arrogarse la representación de las clases populares, vía por la cual también buscaba descalificar a otros sectores de clases medias opositores.

El caso es que entre 2012 y 2013 sectores de clase media urbana protagonizaron masivas movilizaciones sociales, en las cuales se mezclaban diversos reclamos: el rechazo a la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara un tercer mandato de la presidenta, las denuncias acerca de la corrupción de los funcionarios, las restricciones cambiarias y la creciente crisis económica, entre otros. Así, las manifestaciones mostraron que uno de los principales focos de polarización fue la puja intraclase: si desde el kirchnerismo se arrogaban la representación de las clases subalternas, en nombre de 'un modelo de inclusión social', desde la oposición, otros sectores medios movilizados criticaban el creciente autoritarismo del régimen y se arrogaban el monopolio de las banderas del 'republicanismo'.<sup>10</sup> Finalmente, aunque el oficialismo conservó la mitad de las provincias, las elecciones legislativas de 2013 resultaron adversas para el kirchnerismo y enterraron con ello cualquier tentativa re-reeccionista.

---

9. Esto quiere decir que no pocos sectores medios urbanos y rurales que se movilaron contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2008, terminaron votando a favor de la reelección de la presidenta, en 2011.

10. Tengamos en cuenta que en 2011, apenas asumido su segundo mandato, frente a la fuga de divisas y la caída de reservas del Banco Central, Cristina Fernández anunció una serie de medidas restrictivas respecto de la compra de divisas extranjeras (cepo cambiario), que generaron inconvenientes en la importación y una profunda insatisfacción en los sectores medios, acostumbrados a dolarizar sus ahorros.

En los últimos años, luego de lograr la desactivación de los diversos organismos de control del Estado y fundado en una amplia mayoría parlamentaria, el kirchnerismo avanzó sobre el Poder Judicial. Las denuncias de corrupción que involucraban a diferentes funcionarios no prosperaron (aunque llevaron al procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, y a la condena del exsecretario de Transporte), como tampoco las denuncias de enriquecimiento ilícito de otros funcionarios, que incluían a la familia presidencial (recordemos que la propia fortuna de los Kirchner se multiplicó cerca del 1 000 % entre 2002 y 2015) (Oficina Anticorrupción, cit. en Jastreblansky y Ruiz, 2015).

### 3.3. Los ecos del extractivismo y el acaparamiento de tierras

La megaminería a cielo abierto fue un punto crucial donde naufragó el discurso progresista del kirchnerismo, muy especialmente si tenemos en cuenta que en Argentina este tipo de actividad extractiva ha generado numerosas resistencias sociales desde 2003 en adelante. Tal es así que, en su alianza con actores institucionales, las asambleas ciudadanas lograron que se sancionaran leyes que prohíben este tipo de minería en siete provincias argentinas. Durante años, el kirchnerismo logró mantener en los márgenes dichas protestas, encapsuladas en las provincias.<sup>11</sup> Sin embargo, en enero de 2012, el cerco se rompió, gracias a la pueblada de Famatina, una pequeña localidad de la provincia de La Rioja, que ya

había expulsado a otras compañías mineras (entre ellas, a la Barrick Gold), la cual dotó de visibilidad pública a los conflictos contra la megaminería. La periferia se hizo visible en el centro, y al menos por un tiempo breve, durante 2012, las protestas tuvieron un eco a nivel nacional. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión de la megaminería, la entonces presidenta dejó en claro que esta era una parte fundamental y estratégica del modelo de Gobierno. Pese a ello, la pueblada de Famatina tuvo un efecto político y simbólico mayor, mucho más que la discusión sobre la Ley Nacional de Glaciares, de 2010 (Svampa y Viale, 2014), pues puso al desnudo la alianza del Gobierno Nacional con las grandes corporaciones mineras.

Respecto de los hidrocarburos, la situación fue aún más problemática. En un contexto de restricción interna y externa, en 2010 la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en ese entonces en manos del grupo español Repsol, anunció el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, ubicada en la región patagónica de la Argentina. En 2012 el Gobierno realizó la expropiación parcial (51 % de las acciones) de YPF, que volvió así a manos del Estado argentino,<sup>12</sup> e inició un conjunto de transformaciones institucionales y políticas, entre cuyos principales objetivos planteó la explotación de hidrocarburos no convencionales como una manera de impulsar al conjunto de la producción nacional (Svampa y Viale, 2014; Bertinat et al.,

11. Esto se vio favorecido por el hecho de que, gracias a las reformas constitucionales de 1994, los recursos naturales pertenecen a la provincia, no al Estado Nacional.

12. Este había sido privatizada en los años noventa, bajo el gobierno de Carlos Menem, y contó, en ese entonces, con el apoyo de Néstor Kirchner, quien era gobernador de Santa Cruz, una provincia petrolera. La reforma incluyó la transferencia de la propiedad de los recursos del Estado nacional a las provincias; hecho que se extendió a los minerales.

2014). Aunque se habló de modo grandilocuente de renacionalización, en julio de 2013 el Gobierno anunció un acuerdo con la compañía americana Chevron (la cual fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas en Ecuador, cuando era Texaco), otorgándole grandes exenciones y beneficios en la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca del Neuquén. Esos acuerdos fueron secretos y, pese a los reclamos judiciales y a las movilizaciones sociales, el Gobierno se negó a publicarlos.

En este contexto de renacionalización de YPF se tornó muy complicado romper el consenso que se estableció en torno del *fracking*. Aunque hubo numerosos cuestionamientos (organizaciones ambientales, asambleas y pueblos originarios), estos permanecieron en la periferia, ignorados en medio de la euforia eldoradista que promovió el Gobierno. Sin embargo, en un contexto de baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, otro aspecto relevante fue el subsidio del Estado a las compañías petroleras, a fin de mantener el empleo en el sector.<sup>13</sup> Al mismo tiempo, la caída del precio del crudo motivó la paralización de numerosos proyectos de explotación en Vaca Muerta.

En otro orden, el creciente acaparamiento de tierras, así como la especulación inmobiliaria en las ciudades, trajo consigo el aumento de los asentamientos urbanos (villas miseria). Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires, entre 2003 y 2013,

la población en asentamientos aumentó un 50 %. Dicha población, convertida en el blanco de las 'políticas de seguridad' de los gobiernos nacionales y municipales, es también la sede de nuevos movimientos socioterritoriales, que se movilizan constantemente en las ciudades en demanda de tierra y de vivienda.

Por último, la expansión vertiginosa de las fronteras del capital, en clave extractivista, muestra el creciente proceso de arrinconamiento de los pueblos originarios, colocados en la periferia de la periferia. En 2006, a demanda de las organizaciones y en un contexto de creciente conflictividad, se sancionó la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la realización de un relevamiento territorial. Sin embargo, este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y nacional, siguiendo una normativa internacional), contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al Informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en 2011 para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy preocupante atravesado por el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido social, la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de criminalización y represión, entre otros.

Asimismo, tal como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

---

13. Los subsidios al petróleo fueron implementados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante las resoluciones 14/2015 y 33/2015, "donde se dispuso una compensación económica a todas las compañías que extraigan o exporten crudo en Argentina; tales como YPF, Chevron, Pan American Energy, para garantizarles un precio interno de unos 75 dólares por barril, cuando en el mercado externo hoy pisa los 34 dólares". <http://stripteasedelpoder.com/2015/12/macri-prorrogaria-los-millones-subsidios-a-las-petroleras-otorgados-por-el-kirchnerismo/>

Indígenas (Odphi), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando usan los derechos reconocidos jurídicamente (reclamo de tierras y territorios, cuyos derechos se hayan amparados por la normativa nacional y provincial existente). Los datos proporcionados por un informe realizado por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (2012) sobre criminalización de la protesta según sector, son alarmantes. Un relevamiento sobre 2 198 casos, ocurridos entre 2001 y 2012, señala que el 31,4 % del total corresponde a los pueblos originarios, esto es, casi un tercio del total, equiparando este al sector de las luchas sindicales.

Este preocupante panorama lleva a reflexionar acerca de la mutación de las formas de la violencia política en Argentina, y sus blancos predilectos. En los noventa eran los desocupados quienes aparecían como la 'población sobrante', hombres y mujeres descartados en nombre de la globalización neoliberal, cuyos cuerpos se rebelaron al destino de sacrificio y comenzaron a interrumpir las rutas del país. Hoy son comunidades enteras, entre ellas indígenas y campesinos, víctimas del racismo endémico, las que devienen un obstáculo, una piedra en el camino frente a la expansión del 'progreso'. Frente a esto, vuelven aquellas preguntas que invocan la memoria larga, atravesada por el genocidio originario, acerca de cuál es el lugar que la Argentina contemporánea y los modelos de desarrollo hoy imperantes reservan a las comunidades y pueblos indígenas.

En suma, tomando en cuenta lo anterior, cabe señalar la disociación entre las agendas de derechos humanos abocadas a la temática del terrorismo de Estado y los juicios a los militares y la agenda de derechos humanos, ligadas a los impactos del neoextractivismo en los diferentes territorios. Es cierto que este hiato entre ambas agendas fue potenciado por la desconexión existente entre luchas sindicales y luchas contra el extractivismo, pero, en líneas generales, la relación directa entre neoextractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos fue uno de los puntos ciegos del Gobierno kirchnerista y, por sobre todo, de las organizaciones de derechos humanos ligadas a este.<sup>14</sup> En este marco, no es casual que el kirchnerismo mantuviera 'blindado' el discurso progresista (generando así una suerte de progresismo selectivo) frente al carácter estructural de estas problemáticas, negando la responsabilidad del Gobierno Nacional, y subrayaran, en contraste, el peso determinante de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

---

**La relación directa entre neoextractivismo, política de concentración de la tierra y deterioro de los derechos fue uno de los puntos ciegos del Gobierno kirchnerista.**

---

14. La excepción de este divorcio de las agendas de DD.HH. fue el rol siempre aglutinador del Servicio de Paz y Justicia, coordinado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y de Nora Cortiñas, perteneciente a una de las corrientes de la asociación de Madres de Plaza de Mayo. Por otro lado, cabe agregar que, en los últimos años, hubo una tendencia a la tercerización de la represión, a través de la utilización de barras bravas, sindicatos, guardias blancas y sicarios contratados especialmente por latifundistas y propietarios sojeros (en el caso de diferentes provincias, como en Chaco, Formosa y Santiago del Estero).

#### 4. Fin de ciclo e imágenes del ocaso

El ocaso del kirchnerismo no provino solamente del cuestionamiento de los nuevos actores sociales (los sectores sojeros y aliados en el campo económico y mediático) y de la fractura evidenciada en los sectores medios (puja intraclase), cada vez más críticos del modelo de concentración política ilustrado por el kirchnerismo, sino sobre todo del deterioro de los índices económicos y la ausencia de un reconocimiento real de estos. En 2007, la intervención del organismo nacional de estadísticas (Indec) dejó al país sin cifras confiables en relación con la inflación y los niveles de pobreza. El Gobierno comenzó a ocultar la inflación y a desconocer el incremento de la pobreza, pese a que organismos independientes señalaban que la inflación habría empezado a escalar desde 2008 en adelante, hasta llegar al 38 % hacia 2014 y 2015 (situando segundo a Argentina, después de Venezuela, en el contexto latinoamericano); mientras que la pobreza, por su parte, llegó hasta el 29 % hacia el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner (Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina).

Hay que recordar que, desde los inicios del kirchnerismo, y en respuesta a las movilizaciones sociales durante la crisis, el Gobierno mantuvo una política de tarifas públicas bajas respecto de los servicios básicos, a través de subsidios millonarios a las empresas (trenes, subterráneos, colectivos, gas, electricidad), que con el paso del tiempo repercutieron sobre el déficit fiscal, que marcaría los últimos cuatro años de Gobierno. Asimismo, la crisis internacional, la posterior caída de los precios de los *commodities* y la dificultad para obtener préstamos en el mercado financiero internacional, debido al

*default* declarado en 2002, complicaron aún más la economía del país. Uno de los signos más evidentes fue la disminución del crecimiento del empleo privado, que fue reemplazado por el incremento del empleo estatal. En 2014, con la idea de buscar nuevas líneas de crédito, saldó su deuda con el Club de París, lo que implicó un desembolso de USD 9 700 millones a pagar en cinco años, entre deuda e intereses (sumó más de USD 4 735 millones entre punitivos e intereses). Esta era una deuda activa que provenía de los ochenta, de los noventa y principios de los 2000. Sin embargo, el acceso a los créditos estuvo cerrado a raíz del litigio con los *holdouts*, que dejó al país en una virtual cesación de pagos.

En suma, el deterioro de los índices macroeconómicos estuvo acompañado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales), a la par que se iba profundizando la precarización, la alta inflación, las consecuencias del cepo cambiario, la devaluación de 2013, la crisis desatada por la deuda en manos de los *holdouts* y la política impositiva regresiva, entre otros. Sin embargo, en el plano político esto iba sostenido por un discurso oficial acerca de que el kirchnerismo, en tanto 'modelo de inclusión social', no realizaría 'el ajuste' que el sistema parecía estar reclamando.

El fin de régimen se llevó a cabo en el marco de una fuerte concentración de poder político en el Ejecutivo, con una presidenta imposibilitada de sucederse a sí misma, que, sin embargo, buscó controlar hasta en los últimos detalles la campaña electoral de su sucesor (Daniel Scioli, entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires), designando candidatos por doquier y sumando en las cabezas de lista a

miembros de la leal agrupación La C mpora, en desmedro de dirigentes peronistas de larga trayectoria. En esa puja, el kirchnerismo busc  debilitar cualquier opci n de centroizquierda o de liderazgo populista alternativo, empe n ndose en colocar como contracara y rival privilegiado a Mauricio Macri, fundador de Propuesta Republicana (Pro), un partido de derecha nacido en 2005.<sup>15</sup>

Este escenario de ‘fin de ciclo’ contribuy  a la derechizaci n de la oferta electoral, visible en el balotaje de noviembre de 2015, donde la sociedad argentina tuvo que elegir entre Daniel Scioli, un representante de la derecha peronista conservadora, y Mauricio Macri, un representante de la derecha empresarial. La derrota del peronismo a escala nacional y en las principales provincias (entre ellas la provincia de Buenos Aires) dej  a la luz tanto los groseros errores cometidos por el exoficialismo, en la b squeda ciega de su perpetuaci n, como la confusi n entre alternancia pol tica y alternativa, proveniente de vastos sectores de la sociedad argentina.

#### 4.1 Giro a la derecha y luchas sociales

La alternancia inesperada vino de la mano del empresario y dos veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien conform  Cambiemos, una alianza de su partido (Pro) con el tradicional partido radical (Uni n C vica Radical). Cumplido el primer a o de gesti n, el gobierno de Macri evidencia rupturas pero tambi n continuidades respecto de la gesti n saliente. En relaci n con las rupturas, hasta el 10 de diciembre de 2015

la Argentina estuvo gobernada por un progresismo que podr amos caracterizar como un populismo de alta intensidad, marcado por la concentraci n del poder pol tico en el Ejecutivo, el sobreprotagonismo de ciertos sectores de clases medias y, por  ltimo, la subalternizaci n (por diferentes v as) de amplias franjas de los sectores populares. La alternancia pol tico-electoral implic  el pasaje hacia un escenario postprogresista, liderado por una derecha aperturista, con fuerte presencia de funcionarios que componen la elite empresarial, que ha ido implementando una pol tica de ajuste o ‘sinceramiento’ (de la inflaci n, de las tarifas de los servicios b sicos, del valor del d lar, del pago a los holdouts, entre otros), que favorece a los sectores m s concentrados de la sociedad.

Ahora bien, es indudable que el Gobierno anterior dej  como herencia problemas profundos, entre los cuales se destaca el deterioro de los  ndices macroecon micos, acompa ado de medidas que acentuaron los desequilibrios (financieros, fiscales). Sin embargo, lejos de las promesas de ‘pobreza cero’ de la campa a electoral, los caminos elegidos por Mauricio Macri apuntaron a realizar un ajuste tradicional, que golpe  duramente a los sectores m s vulnerables, tal como lo muestran en c mo se busc  implementar los ajustes de las tarifas de servicios, signado por la mala praxis y el escaso registro por parte del nuevo oficialismo de la diversidad social, regional y geogr fica del pa s. As , al comp s de estas medidas, una proyecci n del Observatorio

15. Importa subrayar que Macri lleg  a la alcald a de la ciudad de Buenos Aires, en 2007, favorecido por la divisi n del peronismo, que present  dos listas de candidatos, una de las cuales era apoyada por el oficialismo, que a su vez quit  el apoyo al entonces jefe de gobierno, J. Telerman, de trayectoria peronista, que encabezaba la segunda lista. En 2011, Macri fue reelegido alcalde, con el 47 % de los votos.

Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) para los primeros meses de Gobierno informaba del incremento de un millón y medio de pobres como consecuencia de las políticas implementadas, lo que sumaría ya 13 millones de pobres (UCA, 2016).<sup>16</sup>

Por el momento, el espacio político del oficialismo es estrecho en términos de alianzas sociales, pues no queda claro (no estamos frente a una gestión consolidada) sobre qué sectores, además del bloque empresarial dominante, se apoyará el nuevo Gobierno, y qué estrategias y dispositivos de resubalternización implementará, en un contexto de ajuste, tanto respecto de las clases medias, que hoy ven amenazada la inclusión por el consumo (garantizada por el Gobierno anterior), como respecto de las clases populares, ante las cuales parece ampliarse de modo vertiginoso el horizonte de la marginalidad y la exclusión.

En cuanto a la doble dinámica del capital (no solo respecto de la contradicción capital-trabajo, sino de la relación capital-naturaleza), es claro que el Gobierno actual empeora la relación de asimetría del trabajo frente al capital, al fortalecer la opción por los mercados y perjudicar así a distintas franjas de trabajadores de las clases medias y, sobre todo, de trabajadores de los sectores populares. Al mismo tiempo, respecto de la relación capital-naturaleza se perciben continuidades, pues el nuevo oficialismo apuesta a profundizar la comoditización de la naturaleza por la vía de la expansión del extractivismo (agronegocios, megaminería, *fracking*, represas, urbanismo neoliberal), consolidando así la brecha socioambiental abierta durante el ciclo anterior.

En consecuencia, el escenario postprogresista indica una mayor conflictividad. En esta línea el conflicto sindical viene manifestándose en todas sus aristas y variantes (protestas puntuales, huelgas en el ámbito privado y público, movilizaciones generales de las diferentes corrientes sindicales), en un contexto (sobre todo en las provincias) de sucesivas represiones y encarcelamiento de activistas. Así, el postprogresismo facilitaría un contexto de 'unidad en la lucha', más allá de las heridas políticas abiertas durante el período kirchnerista, tal como lo muestran las dos CTA (de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky, y Autónoma, por Pablo Micheli), que han realizado conjuntamente varias movilizaciones, tanto para repudiar los hechos de represión y criminalización (especialmente la encarcelación de la dirigente social Milagro Sala), así como el veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional, conocida como ley antidespido. Por otro lado, las tres CGT existentes realizaron el 22 de agosto un congreso de reunificación para garantizar una transición por la vía de un triunvirato, luego del alejamiento de Hugo Moyano. Pese al gran malestar que existe en las bases, las negociaciones abiertas con el gobierno de Macri colocan dudas sobre el interés de algunos jefes sindicales ligados a las CGT en apelar a la pura lógica de movilización, previendo la ingobernabilidad que esto podría conllevar en el marco del nuevo Gobierno, que además de no estar consolidado, no cuenta con mayoría parlamentaria.

Por otra parte, respecto del extractivismo, el gobierno de Macri avanzó sobre varios frentes, aunque sin discursos

16. El nuevo informe, de agosto de 2016, señala el aumento de "nuevos pobres" como un "dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora". <http://www.lanacion.com.ar/1927350-para-la-uca-crece-la-cantidad-de-nuevos-pobres>.

vergonzantes. Así, eliminó las retenciones a la minería y disminuyó las de la soja, transfirió la Secretaría de Minería al nuevo Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex CEO de Shell, y creó un Ministerio del Ambiente, donde nombró alguien que confiesa no saber nada del tema, pero que recorre el país defendiendo la megaminería. Asimismo, continúa con el subsidio a las petroleras y, pese al fallo de la justicia, se niega a publicar el convenio entre YPF y Chevron, al tiempo que promete un plan energético que impulsaría la diversificación de la matriz energética (eólica), aunque sin cambios en el sistema energético.

Por último, el Gobierno suele hablar del “cambio climático” y de “participación ciudadana”, aunque en realidad la narrativa del cuidado del ambiente es una fórmula vacía, ligada a una cultura del *marketing* y unos pocos eslóganes efectistas, más que a una propuesta de discusión integral sobre las consecuencias socioambientales, culturales y políticas de los actuales modelos de desarrollo.<sup>17</sup> Un ejemplo ilustrativo es lo que sucede en Jachal, San Juan, donde la vía judicial y la institucional han sido bloqueadas: por un lado, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa contra la empresa Barrick, por el derrame de cianuro sucedido en septiembre de 2015, fue oportunamente desviada a la complaciente Justicia de la provincia. Por otro lado, por presión de los sectores mineros y del propio gobernador, se impidió dar vía libre a la consulta ciudadana que reclama la población. En fin, el nuevo oficialismo

y sus aliados repiten y empeoran la historia legada por el progresismo kirchnerista, cerrando incluso las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.

Pese a la adversidad, en el frente socio-eco-territorial hay que destacar la acumulación organizativa producto de las resistencias durante la década kirchnerista, traducida en la consolidación de numerosos colectivos assemblearios y en la visibilización de los reclamos territoriales de los pueblos originarios, frente al avance de las fronteras del extractivismo y del acaparamiento de tierras. Aunque son conflictos que suelen situarse en la periferia (respecto de los conflictos sindicales, de carácter más central), su ingreso a la agenda nacional, siempre transitorio y fugaz, tiende a ser más relevante que en los años anteriores. Algunos triunfos, como el de la suspensión definitiva de la construcción de la planta de semillas en la localidad de Malvinas, por parte de Monsanto, en Córdoba, tienen como contracara el avance de una Ley de Semillas en el Congreso, donde lo que está en juego parece ser la cuestión del patentamiento (que enfrenta a corporaciones locales con Monsanto) y no el paquete tecnológico (transgénicos más glifosato), desestimando las graves denuncias en cuanto a los impactos sociosanitarios del modelo de agronegocios. Por último, en un marco de empobrecimiento y de temor a la recesión, existe el peligro (o la tentación) de asistir a un contexto de ‘unidimensionalización’ de las resistencias, aun si en la actualidad se

---

17. La problemática de la matriz debe ser entendida en el marco del sistema energético, el cual se caracteriza por su multidimensionalidad. Así, un modelo energético superador requiere no solo diversificación de la matriz, sino, entre otras cuestiones, descentralización y regionalización de la generación, transporte y consumo de la energía, así como el creciente control comunitario del sistema energético (Bertinat, 2016).

registra una conexión mayor entre ambas líneas de acumulación, la sindical-urbana y la socioambiental, esto es, entre centros y periferias, respecto de la conflictividad social.

Lo más notorio del escenario postprogresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a la demandas de paz, pan, techo y trabajo. La movilización multitudinaria arrancó el 7 de agosto, el día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, y marcó el retorno de los barrios a la política nacional, luego de una década de subalternización, bajo el modelo kirchnerista, que había logrado el control sobre diferentes organizaciones territoriales, gracias la combinación entre planes sociales, clientelismo afectivo y oportunidades de consumo. Probablemente estemos frente a un nuevo desborde plebeyo, que viene de la mano de organizaciones de raigambre piquetera, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie (Libres del Sur) y la heterogénea Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), un nuevo espacio conformado en 2015, que es un reagrupamiento de movimientos sociales territoriales, con fuerte presencia del Movimiento Evita (que abandonó recientemente el espacio kirchnerista), de empresas recuperadas, campesinos, cartoneros y otras organizaciones territoriales urbanas.

Sin embargo, este (nuevo) desborde de los barrios pone en evidencia otros problemas, puntos ciegos no tratados durante el ciclo kirchnerista, que dejan en evidencia la fragilidad actual del mundo popular. Así, el desborde popular viene a alertar sobre

los alcances del narcotráfico en los barrios y su capilaridad, a través de la captación de los más jóvenes, que terminan siendo carne de cañón.<sup>18</sup> En realidad, hace varios años que diferentes organizaciones sociales (sobre todo no kirchneristas) vienen denunciando la disputa cada vez más asimétrica en los barrios, a raíz de la expansión de bandas de narcotráfico y redes delictivas, que van desplazando (por la vía de la amenaza y la acción violenta) a las organizaciones sociales. Por ello no es casual la presencia de la Iglesia católica (con sus curas villeros, alentados por el papa Francisco), en esta lucha desigual por el control territorial, donde lo que está en juego es la reconfiguración de las subjetividades populares. En suma, las organizaciones territoriales que vuelven a asomar con su potencia plebeya en el espacio político nacional no son solo fruto de la acumulación, expresión de una interpelación al Estado frente al hambre y la amenaza de desocupación, sino también una lucha agónica de cara al narcotráfico, el cual sin dudas echaría más raíces en un contexto de mayor empobrecimiento.

---

**Lo más notorio del escenario postprogresista es el creciente protagonismo de las organizaciones socioterritoriales, asociadas a la demandas de paz, pan, techo y trabajo.**

---

18. Véanse las interesantes reflexiones de Rita Segato sobre la estatalidad, ligada no solo a la violencia sobre las mujeres, sino a la relación territorialidad-narcotráfico (2014).

A este panorama social cabe agregar otros elementos, pues, contrariamente a lo esperable, tampoco hubo una despoliarización del campo político. En realidad, el Gobierno de Cambiemos exacerbó la brecha, a través de la implementación de una política de revancha, con despidos que alcanzaron áreas relevantes del Estado e involucran personal de planta, y del desmantelamiento de diferentes programas sociales y de inclusión cultural. Por otro lado, lejos de la autocrítica, pese a los casos de corrupción probados que involucran a importantes exfuncionarios, las reacciones del kirchnerismo van también en el sentido de la profundización de la brecha. La tentativa, por parte de un kirchnerismo militante de clases medias urbanas identificado con el modelo progresista anterior, de seguir hegemoneando ciertos aspectos de las luchas (a través de los 'ruidazos' contra el tarifazo y las movilizaciones a favor de la expresidenta) se repiten, aunque su conexión con el mundo sindical y el universo deteriorado de los sectores populares plebeyos es casi nula.

#### 4.2 ¿Hacia una nueva sociedad excluyente?

A un año de la gestión de Cambiemos, si bien es cierto que no se trata de un Gobierno consolidado, pues no cuenta con mayoría parlamentaria y además tampoco ha construido (no todavía) un esquema de resubalternización atractivo para los sectores medios (que debieron ajustarse en términos de consumo) o eficaz en relación con los sectores populares (en un contexto de aumento de la pobreza), los resultados no pueden menos que producir una suerte de escalofrío.

Asimismo, aunque la ruptura introducida por el nuevo Gobierno no significa una vuelta lineal al neoliberalismo, tanto el

aumento acelerado de la pobreza como el ingreso a un escenario más desigualador y decididamente aperturista han reactivado el fantasma de la polarización social, propia de los años noventa. Además, el fin de ciclo y el inicio de una nueva época es visible en la cosmovisión que este transmite cuando aborda temas cruciales como la seguridad, los mercados, el rol de las corporaciones, el endeudamiento, la protesta social, la educación, y la relación entre lo privado y lo público, entre otros. Una cosmovisión que refrenda núcleos centrales del neoliberalismo, pero que además vehicula un *aggiornamento* social y territorial, cuyas aspiraciones pueden llegar a instalarlo en el campo del populismo conservador.

Por otro lado, los efectos de contrapoder de parte de una sociedad movilizadada, con un fuerte lenguaje de derechos, en sus diferentes frentes y líneas de acumulación (socioterritorial, sindical, socioambiental) se han hecho sentir notoriamente, por encima de las diferentes narrativas de cambio. Asimismo, como señalé al inicio de este artículo, el ciclo kirchnerista se caracterizó por una mejora material en los sectores medios y populares, los cuales habrían marcado una reversión de las tendencias excluyentes propias de los años noventa, al menos entre 2006 y 2011, época a partir de la cual el sostenido aumento de la inflación, el estancamiento en la creación de empleo privado, así como las políticas económicas implementadas potenciaron la crisis económica y trajeron como consecuencia, sobre todo en relación con los sectores populares, una licuación de las mejoras logradas.

En suma, en muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la

sociedad argentina, sobre todo desde los años noventa: el fantasma del ‘retroceso social’ (desempleo, descolectivización, movilización social descendente) en sectores populares y ciertos sectores medios. Asimismo, el nuevo ciclo político muestra una sociedad visiblemente dañada, que difícilmente vaya a ser reparada en el marco de la alternancia planteada. No solo porque en ese juego perverso que durante años jugaron tanto el oficialismo como la oposición salieron a relucir los peores sentimientos de la sociedad y de la clase política argentina, sino porque además el kirchnerismo dejó como legado una herida política y cultural que beneficia a las derechas en boga, en detrimento de las izquierdas y centroizquierdas partidarias, hoy colapsadas o divididas, que tarde o temprano tendrán que asumir el desafío de reinventarse.

---

**En muy poco tiempo el giro a la derecha logró reavivar uno de los traumas sociales más dolorosos que recorre la sociedad argentina, sobre todo desde los años noventa: el fantasma del ‘retroceso social’.**

---

Ahora bien, el fin del ciclo anterior y el ingreso a una nueva época no significa, como busca alimentar cierta mirada ingenua y mistificada sobre el docenio kirchnerista, el abandono de un ‘país igualitario’ (el ‘mundo feliz peronista’, ‘la década ganada’), pues la reducción de la pobreza no estuvo acompañada por la disminución de las desigualdades. Desde mi perspectiva, durante el ciclo kirchnerista la Argentina

estuvo lejos de ser un país igualitario: descendió la pobreza y hubo una inclusión por el consumo, al menos hasta 2011, pero las desigualdades se mantuvieron; se acentuó la concentración económica y no hubo una reforma tributaria progresiva. En consecuencia, no es que a partir de diciembre de 2015 los argentinos abandonamos el ‘mundo feliz peronista’ para comenzar a transitar una vez más ‘la larga noche neoliberal’.

Asimismo, frente a las abrumadoras denuncias por hechos de corrupción, tampoco es posible caer en simplificaciones para reducir el kirchnerismo a una pura matriz de corrupción, pues este instituyó una agenda de derechos, que abarcó desde los juicios a los genocidas, la asignación universal por hijo, la estatización de las AFJP, hasta las leyes en favor de la diversidad sexual. Agenda importante pero parcial, pues también obturó de modo interesado y sistemático otras agendas de derechos, ligadas a las luchas de los pueblos originarios, a la crítica al extractivismo y los derechos ambientales, a la precariedad laboral, a la demanda de tierra y vivienda, cuestiones que lejos de ser asignaturas pendientes, se instalaban (y aún se instalan) en el núcleo duro de los modelos de desarrollo, al tiempo que alimentó la concentración del poder político en manos de la expresidenta, ocultando el deterioro de los indicadores sociales y económicos, y profundizando la derechización de la oferta electoral.

Finalmente, hay que ser conscientes de que el retorno de la polarización social y la movilidad social descendente, en un contexto de por sí tan amenazante y complejo para el mundo popular, donde se potencian narcotráfico, violencia y exclusión, instala la posibilidad del ingreso (no ya el retorno) a una situación de intemperie donde podrían

forjarse los marcos de una nueva 'sociedad excluyente'. Sin embargo, aunque este contexto postprogresista presenta un horizonte difícil, 2016 es muy diferente a 1990: ciertamente, como en otros países de la región, existen en Argentina diferentes líneas de acumulación de las luchas, con sus gramáticas políticas y su lenguaje de derechos, que continúan formando parte del acervo de las clases subalternas en el país.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aranda, Darío.  
'La década extractiva, Informe especial', 25/05/2013, <http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html>
- Benza, Graciela.  
'La estructura de clases durante la década 2003-2013', en Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (comp.), Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Bertinat, Pablo.  
'Otra energía es posible', 2013, disponible en <http://www.enredando.org.ar/2013/07/29/no-podemos-discutir-politicas-energeticas-sin-discutir-el-modelo-de-desarrollo/>.
- Bertinat, Pablo, Eduardo d'Elia, Roberto Ochandio,  
Observatorio Petrolero Sur, Maristella Svampa y Enrique Viale. *20 mitos y realidades del fracking*. Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2014.
- Binstock, Georgina, y Marcela Cerrutti.  
'La población y la estructura social', en Gabriel Kessler (comp.), *La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura* (comp.), Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.  
Informe sobre Criminalización de la Protesta, 2012, disponible en <http://encuentromvuj.org/criminalizacion-de-la-protesta/>
- Gras, Carla y Hernández, Valeria (coords.).  
*La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios*. Biblos, Buenos Aires, 2009.
- .  
*El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización*. Biblos, Buenos Aires, 2013.
- Katz, Claudio.  
'La economía desde la izquierda', Anred, 2013, disponible en <http://www.anred.org/spip.php?article7099>
- Kessler, Gabriel (comp.).  
*La sociedad Argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*. Siglo XXI-OSDE, Buenos Aires, 2016.
- Sagato, Rita.  
*Las nuevas formas de la violencia y el cuerpo de las mujeres*. Ediciones Tinta Limón, Buenos Aires, 2014.  
Svampa, Maristella, y Enrique Viale. Maldesarrollo.
- Svampa, Maristella.  
La Argentina del extractivismo y el despojo. Ediciones Katz, Buenos Aires, 2014.
- Svampa, Maristella, y Enrique Viale. Maldesarrollo.  
*La Argentina del extractivismo y el despojo* Ediciones Katz, Buenos Aires, 2014.
- Svampa, Maristella.  
La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005.
- Svampa, Maristella,  
*Debates Latinoamericanos. Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo*. Buenos Aires, Edhasa, 2016.
- Universidad Católica de Argentina (UCA).  
'Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina 2010-2015', 2016, disponible en <http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-Informe-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana.pdf>.

# ANÁLISIS DE BOLIVIA

---

Luis Tapia

Septiembre de 2016

## 1. Composición social y política

Se podría decir que los dos procesos que han configurado de manera más importante la composición social de Bolivia son la revolución de 1952 y luego el ciclo de reformas neoliberales. En medio, hay procesos de expansión y de diversificación secundaria de los patrones que habrían estructurado, en términos de dirección de desarrollo económico y social, estos dos procesos político-económicos más gruesos. La composición social del país hoy es resultado, por un lado, de las estructuras sociales generadas en 1952; también responde a las reformas neoliberales en los años ochenta y noventa y, por otro lado, todavía acarrea algunos aspectos que provienen del período señorial de la historia boliviana. Hay cosas que han tomado varias décadas en madurar, es decir, que han sido producidas por la revolución de 1952 y recién en los últimos años están encontrando una expresi-

sión más fuerte, sobre todo en términos de traducción en poder político. A continuación, bosquejo de manera sintética algunos aspectos de la composición social de Bolivia en la actualidad, en relación con estos procesos históricos.

Hay procesos económicos que tienen consecuencias en varias dimensiones, en particular el desarrollo del campesinado. Esto es el resultado, en principio, de la revolución de 1952, que impulsó una reforma agraria que distribuyó la tierra como pequeña propiedad, sobre todo en el Altiplano y en los valles andinos, sin abarcar todo el país. Durante un primer período, parte de este campesinado, organizado en sindicatos, hizo una alianza en condición de subordinación con la fracción militar que sostuvo la fase de dictadura en los años sesenta y setenta, primero con Barrientos y luego con Banzer. En un segundo momento se independizó a fines de los setenta y reorganizó una central sindical con autonomía ideológica y política. Esto fue preparado y dirigido por el movimiento político-cultural conocido como katarismo, que sostuvo que había que mantener una doble mirada o considerar una doble dimensión: la condición de trabajadores campesinos o trabajadores

---

1. **Luis Tapia Mealla.** Filósofo y politólogo. Profesor e investigador en el postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Coordinador de la maestría de Teoría Política.

agrarios, y la condición cultural o el de ser una nación, que implica identidad, cultura e historia, y más tarde también territorio.

Desde fines de los setenta, pasando por los ochenta y noventa, ocurrió un proceso de expansión del sindicalismo agrario, que implicó también una expansión de la sociedad civil, hasta el punto de que la principal organización de la sociedad civil, es decir, la más grande y con influencia política, es la central campesina. Durante un tiempo, en esta central estuvieron presentes campesinistas, varios izquierdistas, e ideologías y fuerzas nacionalistas y socialistas y kataristas. Resistieron las reformas neoliberales, en particular la propuesta de un régimen de mercantilización generalizada de la tierra. Hicieron alianzas con las formas de unificación indígena, tanto en tierras altas como en territorios quechuas y aymaras, hasta la realización de la Asamblea Constituyente. El sindicalismo campesino mantuvo alianzas con las organizaciones indígenas que corresponden a territorios de tierra comunitaria y que tienen como proyecto la reconstitución y el reconocimiento de sus territorios colectivos.

Sostengo una hipótesis general, que consiste en pensar que en los últimos años no ha cambiado mucho la composición social del país sino la composición política, como resultado de procesos de acumulación histórica más o menos larga, sobre todo en el caso del campesinado. Hubo un cambio en la correlación de fuerzas políticas que, sin embargo, no se traduce necesariamente en cambios en las estructuras socioeconómicas.

Uno de los resultados de la revolución de 1952 y de la reforma agraria es que surgieron pequeños propietarios que no accedieron a la tierra en términos de

propiedad colectiva, sino que esta se repartió en términos de generar una economía agraria moderna. En ese sentido, transformó a comunarios que estaban en condiciones de servidumbre en campesinos pequeños propietarios. El principal cambio que se ha dado los últimos años, en términos de composición política de la sociedad civil boliviana y, por lo tanto, del país, consiste en el hecho de que dentro del sindicalismo campesino se ha experimentado un desplazamiento de la dirección katarista, que, bajo el liderazgo de Felipe Quispe, tenía como uno de sus referentes la reconstitución de estructuras comunitarias en el país. Esa dirección ha sido sustituida por fracciones que son la expresión del lado campesino en sentido más estricto, es decir, propietarios de la tierra que se han vuelto campesinos prósperos después de más de 50 años de reforma agraria, que han diversificado su economía al incursionar en el transporte interprovincial e interdepartamental, han convertido también su capital en comercial y han aumentado la dimensión de la propiedad de la tierra.

---

**Hubo un cambio en la correlación de fuerzas políticas que, sin embargo, no se traduce necesariamente en cambios en las estructuras socioeconómicas.**

---

En este sentido, la dirección de la central sindical está en manos de los sectores campesinos que no tienen como proyecto

la reconstitución del territorio con base en la propiedad colectiva de la tierra sino en el desarrollo capitalista, es decir, desean ampliar la propiedad de la tierra dedicada a la agricultura en términos de propiedad privada. Dado que el Gobierno en tiempos de la Asamblea pactó con las viejas oligarquías terratenientes que no habría una nueva reforma agraria, las únicas tierras disponibles son las fiscales y territorios comunitarios, sobre todo en tierras bajas. En este sentido, la perspectiva del sindicalismo campesino o del grupo dirigente campesino en los últimos años es expandirse sobre territorios comunitarios, al tiempo que se genera una expansión de la frontera agrícola, que promueve el Gobierno para favorecer a productores de coca campesinos y a los agroempresarios, así como la explotación minera y de hidrocarburos con capital transnacional.

Esto produjo la ruptura de la alianza entre organizaciones indígenas y campesinas, y cambió rotundamente la composición política en el país. Se ha pasado de un momento en que la principal contradicción se daba entre un núcleo de oligarquías terratenientes regionales, sobre todo del sur y oriente del país, aliadas a grupos empresariales mineros y agroindustriales y articulada a los partidos con un programa político liberal frente a un bloque que por un tiempo articuló sindicalismo campesino, organizaciones indígenas y algunos otros movimientos populares a favor de la nacionalización, a un momento en que este tipo de antagonismo político ha sido sustituido por otro. Por un lado, se encuentra un bloque que resulta de alianzas entre varios núcleos clasistas con el partido gobernante del MAS, que surge de la central sindical. El eje de este bloque es la alianza entre el

partido gobernante y la central campesina, que a su vez le ha servido en los últimos años para amenazar y reprimir a otras instancias de la sociedad civil. De manera paralela, en los últimos años el partido gobernante sostiene alianzas con los principales núcleos corporativos empresariales del país, sobre todo los del oriente. Les ha ofrecido todas las reformas legales para promover inversión y su expansión en el país, en particular una delirante ampliación de la frontera agrícola a un ritmo de un millón de hectáreas por año.

El partido gobernante sostiene alianzas con núcleos corporativos de la sociedad civil: con los cooperativistas mineros y con varios gremios. Durante un tiempo, no al inicio, mantuvo una alianza con la Central Obrera Boliviana (COB), la que se ha puesto en cuestionamiento en los últimos meses a propósito del despido de obreros fabriles. La COB se ha movilizó contra la política del Gobierno, a la que ha caracterizado como una nueva fase neoliberal.

Por otro lado, el Gobierno ha establecido que el enemigo interno son las organizaciones indígenas, las formas de unificación indígena. En este proceso de separación entre central sindical campesina y formas de unificación indígena, ha habido un realineamiento de las alianzas. En las marchas que las centrales indígenas han sostenido en defensa de su territorio, han articulado alianzas con el Movimiento Sin Miedo, que gobierna La Paz. Estas marchas han sido apoyadas activamente por muchas organizaciones pequeñas ecologistas y por organizaciones de jóvenes anarquistas de núcleos urbanos, como Cochabamba, en particular. Se rompió la alianza entre sindicalismo campesino y organizaciones indígenas y, por un tiempo, se articuló una alianza

entre la izquierda democrática urbana y las formas de unificación indígena. De manera paralela, el MAS ha ido incluyendo cada vez más y con mayor peso a sectores empresariales con los que ha establecido alianzas, acuerdos y políticas gubernamentales, en particular con la agroindustria.

En este sentido, opino que el principal clivaje político es el que existe entre el bloque intercorporativo articulado por el MAS frente a las organizaciones indígenas y aliados, y no así el que aparece en el plano institucional, es decir, el sistema de partidos, entre partido gobernante y oposición partidaria, que ocupa un plano secundario; aunque con el tiempo ha adquirido mayor importancia, sobre todo como resultado de los procesos electorales en las gobernaciones y alcaldías. El MAS ha perdido en todas las principales ciudades y en la mayor parte de los departamentos, frente a una diversidad de fuerzas políticas, la mayor parte con raigambre local y regional.

---

**Estos recursos no necesariamente se han traducido en mayor desarrollo agrario en territorios campesinos tradicionales, mucho menos en territorios comunitarios, sino en enriquecimiento de dirigencias campesinas.**

---

En estos últimos 10 años, el sindicalismo campesino ha tenido más poder que nunca, pues cuenta con presencia en los

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en particular en el sector de los coccaleros. Esto implica que después de más de medio siglo de reforma agraria hay sectores del campesinado que han desarrollado poder económico y se han diversificado como capital comercial y de servicios; ahora tienen también poder político estatal y acceso a recursos estatales. Sin embargo, debido a la dinámica dominante, que consiste en la articulación de un sistema clientelar para organizar el monopolio político por parte del partido gobernante, estos recursos no necesariamente se han traducido en mayor desarrollo agrario en territorios campesinos tradicionales, mucho menos en territorios comunitarios, sino en enriquecimiento de dirigencias campesinas.

Si pensamos en términos económicos el resultado de procesos de larga data, se podría decir que parte de la clase media actual es de origen campesino, algunos son empresarios. En ese sentido, muchos ya no son clase media sino que son burguesía agraria y comercial. Por el otro lado, sobre todo en la zona andina, la clase media está compuesta por mucha población de origen aymara que ha migrado a las ciudades. Muchos han estudiado en la universidad pública y se han vuelto profesionales, otros se han vuelto pequeños empresarios, capital comercial.

En este sentido, podría decir que se tiene una clase media multiétnica. Este cambio de la composición socioeconómica del país no es resultado de las políticas del MAS, sino de la acumulación histórica que viene de las reformas que implicaban modernización de 1952. Lo que sí ha ocurrido en los últimos años es que algunos núcleos dirigentes, sobre todo de organizaciones que están vinculadas al sindicalismo campesino,

han tenido mayor poder político, y aquellos que no tenían poder económico por su actividad productiva se han incorporado como burocracia estatal, y, en este sentido, también a la clase media. Muchos se han vuelto más ricos; pero en todo caso no considero que se pueda decir que este Gobierno ha generado una ola de ampliación de la clase media, sino que este ha sido resultado de medio siglo de acumulación histórica de la revolución de 1952.

A esto añadiría un matiz. Hay otro factor que opera como un inductor de ampliación de la clase media en el medio, y que tiene que ver con la coyuntura de alza de los precios de las materias primas en el mercado mundial, como ocurrió, por ejemplo, en la década de los setenta, durante la dictadura de Banzer, cuando hubo altos precios, particularmente para el gas. Esto implicó una ampliación de la clase media y un aumento del poder adquisitivo de algunos sectores urbanos de clase media en el país. Algo similar ha ocurrido también en la última década, como resultado del ciclo de elevación y de altos precios de materias primas, en particular hidrocarburos, pero también de productos agrarios como la quinua. Esto ha hecho que algunos campesinos pequeños y medianos propietarios se hayan vuelto ricos a raíz de los altos precios de la quinua. Ahora se está experimentando un ciclo regresivo.

A esto se vincula el proceso de reacionalización parcial, o de recuperación o ampliación del control del excedente de los hidrocarburos en el último período. Se ha dicho que había un proceso de redistribución del excedente recuperado por esta vía, y que ha alimentado en parte una expansión de lo que podríamos llamar capas medias en el país, a través del gasto estatal,

en el sentido de aumentos de salarios en algunos sectores, ampliación masiva del empleo dentro del estado y de inversión. Cabe, sin embargo, señalar que en la mayor parte de los casos esta ampliación del gasto público no ha implicado sustantivamente ampliación de la capacidad productiva, en buena parte es una redistribución por la vía de la renta, que está vinculada a la articulación de redes clientelares para organizar una base política para el partido gobernante.

Con los cambios importantes introducidos por las reformas neoliberales que tienen una faceta de desmontaje de capitalismo de Estado, el cierre de minas y empresas mineras estatales, manufactura, privatización de ámbitos de instituciones que respondían a los derechos sociales, una gran parte de la población por esta vía desocupada va al ámbito de la economía informal. En parte la economía boliviana sigue estando soportada o centrada en la explotación de hidrocarburos y la agroindustria para la exportación, de manera secundaria. No hay un cambio de estructura productiva. En todo caso, hay un desmontaje de parte de la dimensión manufacturera, que pasó a trabajar en la maquila para grandes empresas transnacionales. Estas reformas acentúan el peso que tenían en la economía boliviana los servicios y el comercio. En este sentido, uno puede ver que gran parte de lo que se puede llamar clase media en Bolivia está compuesta de empleados del Estado en sus diferentes niveles nacionales y subnacionales, y por gente que trabaja en servicios en las ciudades y en el transporte interdepartamental. El aumento de la renta de hidrocarburos ha alimentado en parte el crecimiento de algunos sectores ligados, sobre todo, al comercio y servicios.

En términos socioeconómicos, podría decir que la clase media boliviana es bastante homogénea, pues proviene de estos sectores mencionados; pero, por el otro lado, también es bastante heterogénea, como lo ha sido antes, sobre todo en lo que concierne a su dimensión política. Por un lado, lo que se llama clase media en principio es un criterio socioeconómico. Es algo que está compuesto por gente de diferente origen étnico-cultural, que ha aumentado no como producto exclusivo de este Gobierno sino de reformas previas de larga data, como resultado de estrategias familiares. Hay familias de origen aymara y quechua que son clase media como resultado de cierto grado de inserción y prosperidad en los circuitos comerciales y de servicios. Muchas personas de origen aymara y quechua se han profesionalizado en las universidades públicas, en principio, y luego también en las privadas.

En lo político, la clase media es heterogénea. Se podría decir que hacia inicios de siglo, en el período de las grandes movilizaciones antiprivatización y de las organizaciones indígenas, un núcleo de clase media reaccionó expresando cierto grado de racismo, tachando de irracionales estas grandes movilizaciones en tanto afectaban a la relación de poder preexistente. En torno al año 2005 se podría decir que se trataba de una clase media dividida. Una parte apoyaba un cambio de gobierno y, en particular, apoyó la idea de la nacionalización de los hidrocarburos. Otra parte resistía el cambio de la relación de fuerzas. Hubo un período en que el MAS creció electoralmente en las ciudades, hasta la aprobación de la nueva Constitución. Luego su apoyo electoral empezó a declinar sistemáticamente, de tal modo que ha perdido en todas las capitales de departamento, en algunas ciudades por

una amplia diferencia. Se podría decir que tiene un tercio de apoyo de la población. En la mayor parte de la clase media se respira un ambiente anti-MAS. Esto no necesariamente significa una posición conservadora, anticampesina o antiindígena sino que es un básicamente un rechazo del modo autoritario de ejercer el poder estatal y de llevar adelante el Gobierno de este país.

## **2. Situación de las organizaciones sociales y movimientos**

Una parte importante de las organizaciones de la sociedad civil constituidas por trabajadores campesinos, trabajadores fabriles y diversidad de gremios articulados en torno a la producción manufacturera artesanal y al comercio en particular, se encuentran en una situación de negociación corporativa con el Gobierno. El resultado es una subordinación política. En particular esto ocurre con la gran central sindical campesina, que se encuentra totalmente sometida al Gobierno; durante un período ocurrió con la central obrera boliviana.

El MAS negoció, en particular, con la central campesina la inclusión de representantes en todos los poderes y niveles del Estado a cambio de un apoyo que se ha vuelto casi incondicional, incluso en momentos en que afecta a los intereses de los campesinos, como el apoyo a la agenda de los agroindustriales acordada con el Gobierno en 2015. Este proceso contempló, primero, una fase de inclusión al Estado, en los diferentes poderes, lo cual permitió canalizar recursos. Parece que esto se ha circunscrito básicamente a los dirigentes y no se ha traducido en inversión productiva estructural en los sectores. Ha pasado luego por una creciente subordinación a la cabeza del

Ejecutivo. Esto ha tenido como resultado la fase de mayor empobrecimiento de la vida política en el seno de estas organizaciones y, en consecuencia, también de la sociedad civil casi en su conjunto en comparación con los períodos previos, ya que las organizaciones pasaron de ser espacios políticos de organización y de discusión de los principales problemas (no solo del sector sino del país y de la articulación de proyecto político), a una fase de inexistencia de vida política interna, en la medida en que las organizaciones han servido para canalizar una mediación descendente desde el Ejecutivo, que es sustitutiva de la vida política interna.

En este sentido, el sindicalismo campesino ha operado como un aparato paraestatal que, incluso, se ha movilizó para reprimir marchas indígenas en defensa de su territorio. El sindicalismo campesino femenino, las Bartolinas, incluso ha defendido a masistas frente a denuncias de violación de mujeres campesinas. En este sentido, ha dejado de ser una organización de defensa de los trabajadores y se ha vuelto una organización de defensa de la arbitrariedad de los jefes del Poder Ejecutivo.

La situación es diferente en relación con las formas de unificación indígena que hicieron posible la coyuntura de posibilidad del cambio político y social en el país. Tanto el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), han establecido alianzas electorales con el MAS para ir a la Asamblea Constituyente y con algunos sectores para entrar el Parlamento, en condiciones de negociación bastante asimétricas. Han sido objeto de discriminación, sobre todo los pueblos de tierras bajas. Sin embargo, mantuvieron estas alianzas en tanto el MAS operaba como

un referente para enfrentarse a las oligarquías locales y regionales.

Cabe recordar que de manera paralela la forma sustantiva de unificación en el país fue una manera de unificación del sindicalismo campesino con las grandes asambleas y confederaciones indígenas, el Pacto de Unidad, que es donde se imaginó y proyectó la idea del Estado plurinacional. Esto se rompió definitivamente en torno a la coyuntura de la defensa del territorio interétnico en el Isiboro Sécore (Tipnis). Es la coyuntura de revelación del proyecto extractivista del MAS, impulsado desde antes. Esto generó un realineamiento entre las organizaciones sociales. En esta coyuntura se quebró el Pacto de Unidad, promovido por el MAS. No solo se quebró esta forma de unificación sino que fracciones del sindicalismo campesino se movilizó para reprimir la marcha indígena. Esto implica que se ha pasado de una fase de unificación intersindical y organizaciones indígenas a una fase de separación, de enfrentamiento y antagonismo, que se mantiene hasta hoy.

---

**El sindicalismo campesino ha operado como un aparato paraestatal que, incluso, se ha movilizó para reprimir marchas indígenas en defensa de su territorio.**

---

En torno a la marcha en defensa del Tipnis, ocurre algo significativo. Hubo un apoyo de las ciudades que cruzó la marcha, que se tornó masivo en el caso de la ciudad de La Paz, lo cual favoreció una penetración de la idea de Estado plurinacional

en los núcleos urbanos. Cabe recordar que la idea de Estado plurinacional no era una idea que tuviera asidero en las ciudades sino que era un proyecto indígena. Frente a esto, el Gobierno desde entonces ha realizado varias prácticas de división interna de las organizaciones indígenas y de creación de organizaciones paralelas, tanto en el caso del Conamaq como de la Cidob, para hacer aprobar sus políticas, que afectan en particular a territorios indígenas, como la construcción de carreteras, represas y concesiones mineras. Todo esto implica que en el país ha habido una reducción de la vida política en el seno de las organizaciones de trabajadores, y se ha generalizado la articulación de una red clientelar y la subordinación al Estado. Se ha generalizado, además, la persecución a las organizaciones independientes, en particular a las indígenas. Esto hace que en estos espacios la preocupación central sea la de resistencia y supervivencia frente a la política represiva gubernamental, y no así la articulación o el avance en nuevas fases de propuesta y proyecto político, lo que, por lo pronto, se ha esfumado en el país.

En Bolivia se crearon las condiciones para que el MAS operara como un partido de los trabajadores; sin embargo, la tendencia ha sido la contraria. Con el tiempo, casi todos los candidatos del MAS, sobre todo en el oriente, son miembros de fracciones terratenientes, de capital comercial, muchos de origen aymara. En ese sentido, no se podría decir que el MAS es un partido de los trabajadores, sino un partido de los empresarios, solo que responde a una composición heterogénea. Se trata de un partido de origen campesino, en el que cada vez tienen más peso sectores del capital comercial y de servicios. Lleva adelante

un conjunto de políticas económicas que favorecen al núcleo empresarial tradicional, que había perdido poder nacional pero lo mantiene regionalmente en el oriente y en el sur. En este sentido, se puede señalar que hay una fuerte correspondencia entre una diversidad de núcleos empresariales aymaras y quechuas, que tienen un proyecto de desarrollo capitalista, y el MAS, que también tiene un proyecto totalmente capitalista. A su vez, el MAS ha establecido alianzas con fracciones del viejo bloque económico dominante, lo cual sería algo nuevo. Ha habido un cambio en la relación de fuerzas en el país, que ha hecho que el viejo bloque dominante pierda el control del Estado a escala nacional, que ha causado la desaparición de los partidos del bloque neoliberal.

Los acuerdos políticos hoy se dan entre las organizaciones corporativas empresariales de la agroindustria, los terratenientes y mineros, y el partido gobernante. Sus intereses económicos son promovidos por un partido de origen campesino. Esta convergencia es la novedad, y es el resultado del cambio en la relación de fuerzas y el cambio de los sujetos gobernantes.

En relación con la clase trabajadora, esta fue fuertemente golpeada por las reformas neoliberales, lo que implicó un decrecimiento del trabajo formal, sobre todo en los núcleos manufactureros y en las empresas estatales. En parte, esto se vio compensado por el crecimiento de la producción informal, en particular por el trabajo de maquila en el contexto de la nueva división internacional del trabajo, que hacía que hubiera una nueva clase obrera, tal vez más grande o algo similar en dimensión en relación con la condición previa, pero ampliamente desindicalizada

y sin derechos sociales, en condiciones de ciudadanía reducida.

Esto no se ha modificado en términos de condiciones generales. En el país hay un núcleo pequeño de trabajo formal, que se ha beneficiado de algunos decretos del Gobierno, emitidos tardíamente después de varios años, para modificar algunas aristas del modelo neoliberal sin sustituirlo, que ha implicado sobre todo una regulación del salario mínimo, que ha aumentado significativamente a casi el doble a lo largo de los años. Hay, sin embargo, algunos datos más recientes que muestran que hay un decrecimiento de la economía en el ámbito manufacturero privado. Los datos señalan que en los últimos años han cerrado entre 4 000 y 6 000 empresas al año. Hasta mediados de 2016 se cerraron 4 000. Esto no solo implica que se trata de trabajo y de producción que se vuelve informal, sino de un decrecimiento general de la actividad productiva. A esto se añade un decrecimiento en las capacidades de abastecimiento de alimentos en el país. Cada vez más la alimentación del país se basa en productos de los países vecinos, según la región, Chile, Perú, Brasil. Casi un 65 % de la alimentación se basa en productos importados. Esto se ve agravado por algunas declaraciones del Gobierno en favor de la agroindustria, pues se piensa expandir los transgénicos más allá de la soya, que es el ámbito donde ya se los utiliza. Además, se quiere expandir la frontera agrícola para la producción de soya y productos transgénicos orientados al mercado externo. Esto se acompaña de medidas de apertura de fronteras, que van a agravar la condición de los productores agrícolas campesinos en el país.

En los últimos meses ha habido un proceso de alejamiento de la central obrera respecto del Gobierno, incluso de movilizaciones en contra, con el horizonte de la ruptura de un pacto que sostuvieron los últimos años, que implicó la subordinación y la pérdida de autonomía política de la central obrera respecto del Estado y del Gobierno. Hay indicios de una recomposición interna en el seno de la central obrera, que puede desarrollarse hacia adelante en términos de una reconstitución de su autonomía política, por lo menos en un sentido elemental de superar la subordinación al Gobierno, aunque no haya todavía la capacidad de articulación de la sociedad civil y del proyecto político, es decir, autonomía política en sentido fuerte como en los años setenta y ochenta.

Bolivia pasó a ser un país predominantemente urbano, pues desde hace varios años aproximadamente un 75 % de los habitantes viven en ciudades. No obstante, no hay cifras confiables. El último censo fue criticado por la mayor parte de la gente que conoce del tema, porque, se afirma, las cifras han sido manipuladas, sobre todo para quitar representantes congresales y presupuesto a regiones en las que el MAS pierde electoralmente. En ese sentido, no es un instrumento confiable. En todo caso, existe la tendencia de más largo plazo a la conversión del país en un territorio mayoritariamente urbano.

Sin embargo, hay paradojas y desplazamientos. Aunque la mayor parte de la población boliviana vive en las ciudades, las organizaciones que tienen mayor peso en la vida política nacional son un partido de origen campesino y la central sindical campesina, que es la organización más grande en el país. Sus dirigentes están a la cabeza del

Poder Ejecutivo en el país, aunque no tengan un proyecto de desarrollo campesino como el eje central. Por el otro lado, otra organización de poder importante es la confederación empresarial de la agroindustria en el oriente del país, que asienta su poder en el campo. En los últimos tiempos mantiene una alianza con el Gobierno, que ha asumido el programa económico de la agroindustria.

### 3. Los partidos políticos

La primera gran transformación del sistema de partidos se dio en los años ochenta y se desplegó en los noventa, cuando la mayor parte de las organizaciones partidarias se volvieron básicamente máquinas electorales. Esto hizo que el Parlamento, en consecuencia, perdiera representatividad y se encubara una crisis de legitimidad. En ese período se articuló el tipo de relación entre partidos y sociedad civil, que luego se ha acentuado sin cambiar su orientación principal. En la medida en que la mayor parte de los partidos políticos abandonó la sociedad civil, en tanto fuerza promotora de organización y vida política interna, discusión y articulación de alternativas en ese ámbito, los partidos se volvieron máquinas electorales y necesitaron negociar representatividad con las principales organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad o con una gran variedad de ellas. Negociaron con dirigentes de juntas vecinales, sindicatos y gremios la inclusión de sus miembros como candidatos a concejales, diputados y otras instancias estatales, a cambio de apoyo político. Se armó una extensa red clientelar y de prebendas ya desde los años noventa en adelante, que el MAS solo generalizó en mayor medida, en una condición en la que hubo

un cambio en la relación de fuerzas. Las organizaciones de trabajadores y los gremios, por su parte, no podían conseguir mucho negociando con los partidos liberales, atravesados por la división clasista y étnica de la sociedad. La victoria del MAS cambió las condiciones de la negociación para representantes de estas mismas organizaciones de la sociedad civil, que pudieron convertirse en cabezas de ministerios, senadores, diputados y asumir cargos en los diferentes niveles de la estructura del Poder Judicial.

Además, se crearon las condiciones para que otras corporaciones de la sociedad tuvieran más poder político en términos de penetración en el Estado, en particular para sus dirigentes. En ese sentido, el MAS se convirtió en una maquinaria electoral articulada en torno a negociaciones bilaterales de carácter corporativo con un amplio espectro de la sociedad civil. Son las organizaciones de la sociedad civil las que organizaron y articularon la representatividad corporativa sectorial básica, que luego se negoció con los partidos políticos por un buen tiempo, principalmente con el MAS. Esto se acompañó de una reducción del horizonte político de los partidos, en particular del MAS. Este articuló negociaciones a un nivel corporativo o cuotas de inclusión, pero nada de proyecto político. Por un tiempo, esto fue articulado por el Pacto de Unidad, pero esto ya no existe en el país.

En el lado de la derecha del espectro del sistema de partidos, el rasgo dominante también es el que se trata de máquinas electorales. Este rasgo se combina con elementos de defensa política de intereses socioeconómicos e ideológicos. Varios miembros de los partidos de derecha que se derrumbaron fueron reciclados por el MAS. Algunos han sido articulados a las

nuevas expresiones partidarias de la oposición de derecha en el país, sobre todo en el oriente y en el sur. Se trata de partidos articulados en torno a núcleos corporativos empresariales, que a su vez articulan gente que tiene creencias contrarias a las que el MAS dice sostener. A los partidos se articulan individuos y colectividades liberales que creen en un estado de derecho con división de poderes y un régimen de democracia representativa; pero se podría decir que en casi todo el espectro partidario se trata de máquinas electorales montadas en torno a núcleos corporativos de la sociedad civil, en caso de sindicatos y gremios, y en el otro caso en torno a los núcleos corporativos vinculados a intereses socioeconómicos empresariales, que también participan de la máquina electoral del MAS.

---

**La ausencia de organización o un canal partidario para organizar vida política, discusión política y proyecto político tiene como resultado esta proliferación de organizaciones ciudadanas.**

---

En este contexto, el rasgo predominante es esta articulación entre partido como máquina electoral y núcleos corporativos de la sociedad civil. En los últimos años están surgiendo varias iniciativas de colectividades ciudadanas que expresan formas de articulación de crítica y protesta frente al autoritarismo del Gobierno y a sus planes socioeconómicos, como inversión

en energía nuclear, represas, carreteras en territorios indígenas, y la política fiscal.

Si bien el país es predominantemente urbano, hay mucha fragmentación y debilidad de organización política. Se ha debilitado la dimensión de organización política, en particular la organización política partidaria. La ausencia de organización o un canal partidario para organizar vida política, discusión política y proyecto político tiene como resultado esta proliferación de organizaciones ciudadanas, algunas de las cuales están buscando converger para articularse como alternativas electorales en próximas elecciones, en particular en el ámbito municipal.

**ALGUNOS APORTES  
A LA LECTURA DE CAMBIOS EN  
LA CONFIGURACIÓN SOCIAL Y  
POLÍTICA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS**

---

Donka Atanassova I.

# Algunos aportes a la lectura de cambios en la configuración social y política en los últimos 15 años

Donka Atanassova I.<sup>1</sup>

Septiembre 2016

El cierre de ciclo implica el inicio de uno nuevo, en la historia no hay vacíos. Lo interesante de este momento en Colombia es que dos elementos han logrado abrirse espacio (pequeño aún, pero constituyen una brecha o una ventana entreabierta) en el sentido común del país: que es mejor la paz que la guerra, y que son necesarias nuevas maneras y contenidos de hacer política y gobierno. Hay una expectativa de cambio, pero esta vez la respuesta a esa expectativa no necesariamente está personificada (en el imaginario de la gente) solamente o preferencialmente por la izquierda o por los movimientos alternativos *per se*. Quién o qué puede tener las claves de las respuestas de esa expectativa es una pregunta que genera una gran disputa.

## 1. Algunos trazos de las realidades de Colombia

La configuración social colombiana tiene la característica de ser diversa y estática a la vez.

Diversa porque para su comprensión son determinantes varios factores que se mueven en esa clave, mencionaré algunos.

La *configuración regional*. Colombia tiene 32 departamentos, pero más allá de las divisiones político-administrativas, su vida palpita regionalmente, entendidas las regiones como campos que hacen converger un conjunto de relaciones con y entre las dimensiones de poder, territorio, producción y cultura de manera particular e históricamente construida. El 'desarrollo' del país se ha concentrado sobre las zonas ubicadas en la cordillera de los Andes, que atraviesa el país de sur a norte, y alrededor de las tres principales ciudades de la Costa Atlántica. Las demás zonas del país han ido

---

1. **Donka Atanassova I.** Socióloga de la Universidad Nacional y Máster en Estudios Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Actualmente es docente universitaria e investigadora. Reside en Colombia desde hace 24 años y lleva dos décadas trabajando con y desde los procesos sociales y en dinámicas de construcción de confluencias políticas desde proyectos políticos transformadores, y a partir del proceso de Fuerza Común.

existiendo al margen, pues nunca se las ha incluido en las coberturas oficiales de los servicios, indagaciones, encuestas; han permanecido invisibles en la lógica oficial (Costa Pacífica, Amazonía, Piedemonte llanero, Orinoquía, Magdalena Medio-Catatumbo, Guajira y San Andrés y Providencia-islas). El centro tiene el poder político y económico, los pocos desarrollos industriales están ahí, así como la economía de servicios, las grandes ciudades y la educación: todo. Mientras los índices de pobreza alcanzan entre 40 % y 50 % en departamentos como Chocó, Cauquetá y Norte de Santander, en Bogotá son de 10 %.

En los últimos 15 años, el *boom* extractivista renovado ha generado un nuevo interés en las zonas periféricas: petróleo, gas, minerales, agua, oxígeno y cultivos de uso ilícito. Algunas ya eran productoras de esas materias primas, pero en muchos casos se las explotaba en lógica de economías informales y de guerra. En las últimas décadas, la entrada de nuevos poderes multinacionales y la 'cualificación' de poderes ilegales ya existentes han implicado fuertes disputas sobre esas economías que muchos buscan controlar. Ese interés no ha estado de la mano de una estrategia general de mejoramiento de las condiciones de vida, y eso profundiza desequilibrios y desigualdades.

Finalmente, esas economías potencian las élites políticas tradicionales en las regiones y también ayudan a que surjan nuevos sectores de poder y capacidad económica que antes no tenían relevancia; muchas veces de carácter volátil y políticamente inciertos, cuya única certeza es la ambición. Que esos poderes sean distintos y que además emerjan en las regiones aquellos que buscan cambios profundos y justicia es uno de los mayores retos políticos.

Otro aspecto que se debe entender en clave regional es que más del 75 % de la población vive actualmente en ciudades y el resto en el campo. Es una tendencia que se consolidó en varias olas desde mediados del siglo XX y está en continuo crecimiento. Aunque el Informe Nacional de Desarrollo Humano del año 2011 (PNUD) propone una mirada más abierta con un nuevo índice de ruralidad que apela al carácter rural de muchos de los municipios que el índice tradicional mide como urbanos, apenas el 31,6 % de la población es definido como habitante rural.

Una tendencia proporcional, también en términos de desigualdad, es que en la mayoría de departamentos el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del doble o más en las zonas rurales que en la ciudad principal. En el caso del índice de Pobreza Multidimensional, ese dato se triplica entre lo que marca en las cabeceras urbanas y lo que registra en los centros poblados y el área rural dispersa.

En este aspecto, ha habido oleadas permanentes de pobladores del campo hacia la ciudad: 6 millones según datos oficiales y 8,5 millones según datos de organismos no gubernamentales son las personas desplazadas hacia las ciudades por el último ciclo del conflicto armado. Personas que fueron despojadas de sus tierras, bienes e historia. Este ciclo, y específicamente la actuación paramilitar en las décadas de los ochenta, noventa y 2000, constituyó un nuevo ordenamiento territorial forzado, nuevamente ligado a los poderes y economías regionales que ya mencionamos.

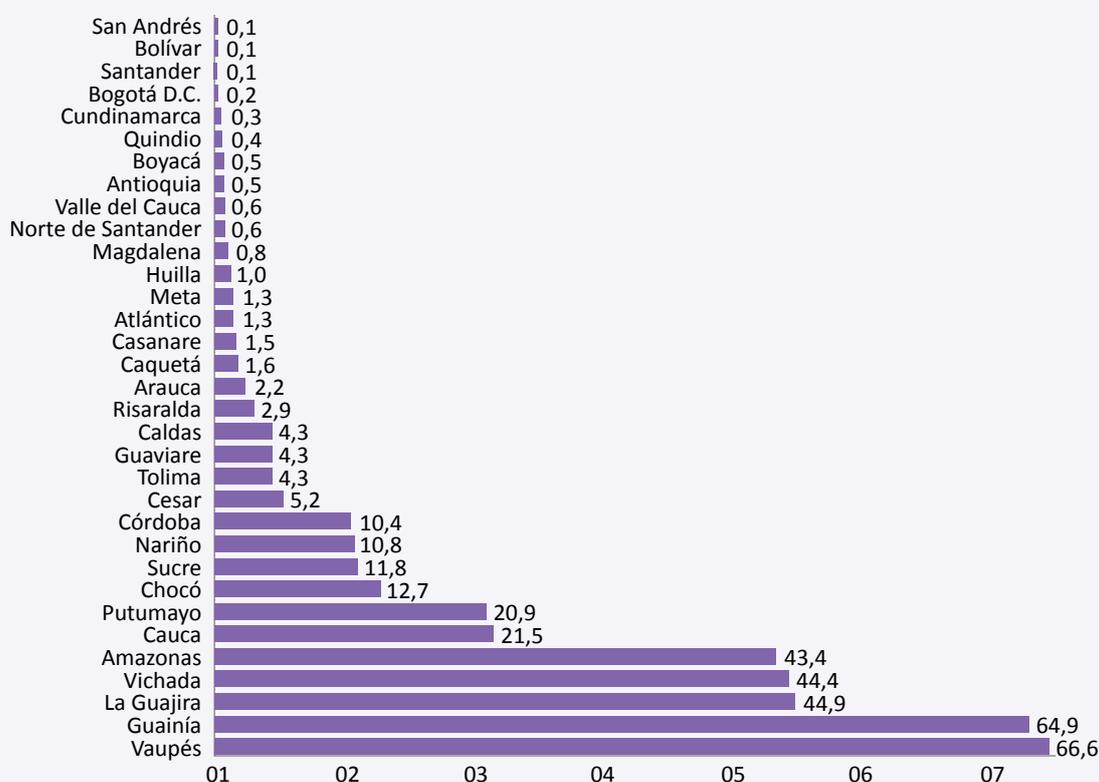
Las ciudades son también espacios y territorios de la segregación poblacional, cultural, política y económica. La proporción

de la informalidad más baja en capitales departamentales es del 45 % en ciudades como Bogotá, Medellín y Manizales y del 70 % en capitales como Cúcuta; el 38 % (promedio nacional) del trabajo aún se pacta solamente de manera verbal, sin ningún tipo de contrato ni de garantías. Si bien las ciudades son alternativa para mucha gente, esa alternativa implica salir de la situación apremiante, no necesariamente mejorar las condiciones de vida. De esta manera, es difícil pensar que las ciudades en sí están ayudando a consolidar una clase media estable. Por otro lado, se ha presenciado una movilidad social debida a la ampliación de espacios privados para la educación superior de distintos niveles y calidades, atados a créditos bancarios de mediano y largo plazo.

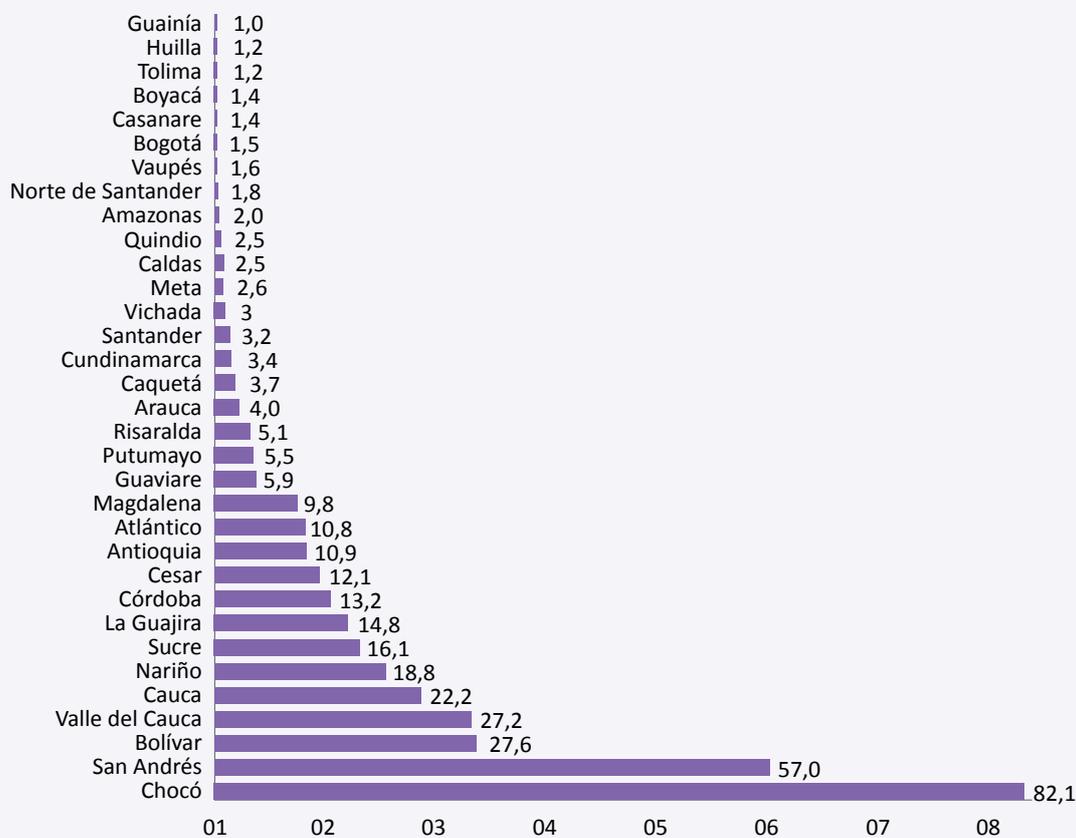
*La mezcla poblacional: vecindades y fronteras.* La historia demográfica de Colombia es la historia de los flujos de desplazamientos, unos por razones económicas, de búsqueda y apertura de nuevas oportunidades, y otros motivados por la guerra y los intereses sobre la tierra que de manera violenta han despojado millones de personas. Ese flujo permanente de población constituye la base de la ‘mezcla social’ que hace que convivan personas muy distintas en todos los escenarios.

En relación con el tema de los pueblos, como lo plantea el último Censo Nacional (2005), “en Colombia residen 1 392 623 indígenas que corresponden al 3,43 % de la población del país; los afrocolombianos son 4 311 757 personas, el 10,62 % del total, y el

**Cuadro 1. Población indígena por departamento**



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2015

**Cuadro 2. Población Afro por departamento**

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2015

pueblo Rom o gitano está conformado por 4 858 personas, que representan el 0,01 % de la población total del país” (cuadros 1 y 2). Esto significa que la población colombiana que se reconoció como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06 % de la población, el restante 85,94 % no se consideró perteneciente a ninguno de los anteriores grupos étnicos.

Sobre los aspectos demográficos étnicos, no hay mucha claridad en términos comparativos, pues durante años los censos nacionales no incluyeron el tema o lo incluyeron siempre de manera diferente, lo cual hace que la información no sea comparable. Sin embargo, existen algunos elementos cla-

ves para entender el fortalecimiento político de los sujetos étnicos organizados.

En primer lugar, a partir de los años setenta del siglo XX, la lucha indígena empieza a adquirir una especificidad e intensidad distintas a la dinámica de las organizaciones campesinas en general, haciendo énfasis en los temas de territorio ancestral, autonomía, reconocimiento cultural, entre otros, y separándose organizativamente de las organizaciones campesinas. Por otro lado, la Constitución de 1991 dio un viraje total en cuanto al reconocimiento de la diversidad de pueblos en el país, validándolos como sujetos de derechos específicos y reconociendo sus autonomías y derechos

políticos diferenciales. La dinámica organizativa y la visibilidad política de los pueblos indígenas en ese momento era muy alta y ello hizo que estos hechos se tradujeran en fortalecimiento.

En cuanto a los pueblos afro, había un dinamismo organizativo muy interesante en los años ochenta y noventa en los territorios correspondientes a la Costa Pacífica colombiana, fruto de los procesos históricos de resistencia de esa población y también de soportar los golpes muy duros del paramilitarismo y el narcotráfico en esa época. La Constitución de 1991 también abrió un espacio de derechos para esa población, a través de la Ley 70 de 1993, que apenas ha sido reglamentada, pero generó el reconocimiento de los territorios colectivos afro y los Consejos Comunitarios de esos pueblos.

Es importante dar cuenta de que la vecindad también genera conflictividad. En el campo de las organizaciones sociales, es cada vez más visible la conflictividad por la tierra y el territorio entre sectores campesinos, indígenas y afros. Si bien la Constitución reconoció derechos, estos también constituyen conflictos entre sujetos que viven en el campo y que terminan peleando entre sí por las mismas tierras que el Estado asigna por ley. Mientras los indígenas y afros cuentan con reconocimiento diferencial y con figuras de ordenamiento territorial particulares, los demás pobladores del campo no lo tienen. Paradójicamente, los logros de la lucha por los derechos diferenciales se entretujieron con otros factores hacia la fragmentación de la lucha por la tierra y aún no hay estrategias contundentes que vuelvan a juntarla.

Por otro lado, la configuración social colombiana, aparte de diversa, como ya se ha visto, también es estática por las siguientes razones:

*La concentración de la riqueza.* En Colombia, según datos publicados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015), 10 % de la población más rica del país gana cuatro veces más que 40 % de la sociedad. Es una brecha medible en lo económico, pero que se expresa en todas las dimensiones de la vida.

En cuanto a la dinámica de la economía, según las declaraciones de renta de las empresas entre 2009 y 2014, los gastos de nómina de las más ricas crecieron en términos nominales durante ese período, en un 17 %; mientras tanto, el patrimonio de estas aumentó en un 95 % y para el año 2014. Las empresas más ricas del país concentraron el 95,8 % de la riqueza. De esta manera, podemos detectar que la generación de empleo e ingresos no es prioridad, la concentración cada vez mayor de la riqueza es el hecho; las mismas empresas más exitosas del país son las mayores deudoras con la sociedad, desde el punto de vista del gasto tributario.

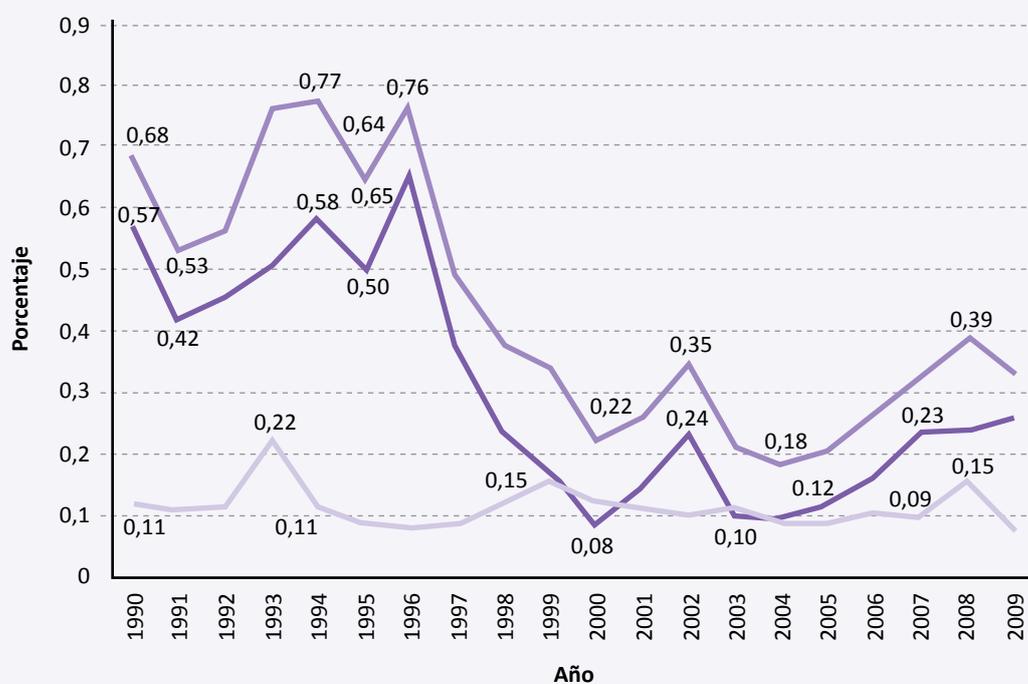
Lo mismo sucede con la concentración de la propiedad de la tierra. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011, dedicado al tema del campo en Colombia, la gran propiedad de tierra representa el 52,2 % de las áreas cultivables rurales del país y está en manos del 1,15 % de los propietarios; mientras que la pequeña propiedad, que representa apenas el 10,6 % de las áreas, está distribuida entre el 78,3 % de los propietarios, lo que convirtió a Colombia, para ese año, en el país con el más alto índice de Gini en cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra: 0,85. Esta situación ha sido constante en los últimos 100 años. El fracaso de las reformas agrarias, la persecución y estigmatización de las organizaciones campesinas, una política de mercado de tierras insuficiente, la

dinámica del conflicto armado y del narcotráfico, la influencia política de los grandes propietarios en el poder nacional y regional, y la falta de información para reconocer y abordar el problema son algunas de las razones que el mismo informe señala para explicar esta realidad.

Para extender un poco el análisis sobre la situación de la economía en el campo y enfatizar en el tema alimentario, es importante decir que el crecimiento del agro es una de las grandes expectativas y promesas del momento de los postacuerdos de paz, sin embargo, los datos de las últimas décadas no son alentadores. Con la apertura económica de la década de los noventa se le declaró la guerra a la economía del agro en Colombia, y a partir de ahí la capacidad de producción nacional ha disminuido. Asi-

mismo, ha aumentado la importación de alimentos, que llega, en la actualidad, a un 35 % a escala nacional. Las exportaciones crecieron apenas el 4 % desde 2014, mientras que las importaciones lo han hecho al 13 % anual en el mismo período. El mensaje que se mandó, como lo ha señalado la oposición política de izquierda, fue que la economía nacional se sostendría a partir de la explotación de petróleo y carbón, y no se hizo ningún esfuerzo para promover la economía del campo, excepto las grandes agroindustrias, sobre todo la de la caña y sus derivados, aunque hasta en ese campo se teme que con el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) se venga una ola de importaciones de alcohol carburante y bajas en los precios del azúcar.

**Cuadro 3. Gasto Público Sector agropecuario (apropiación definitiva % PIB)**



Fuente: Cálculos INDH 2011, basados en el *Anuario estadístico* del MADR período 1990-1999, y en la base de datos DIFP-DNP período 2000-2010.

**Cuadro 4. Tendencia de disminución en cultivos de ciclo corto en los últimos 3 años**

ÁREA COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE CICLO CORTO 2015 VS 2014									
CULTIVOS	HECTÁREAS		VARIACIÓN ANUAL		TONELADAS			VARIACIÓN ANUAL	
	2014	2015 Pr	%	Absoluta	2013	2014	2015 pr	%	Absoluta
<b>TOTAL CULTIVOS CICLO CORTO</b>	1 340 137	1 250 529	(5,9)	(79 508)	8 978 443	8 704 182	8 855 891	1,7	151 708,7
<b>CEREALES</b>	910 452	851 371	(6,5)	(59 091)	4 047 558	3 909 258	3 973 571	1,6	64 403,3
Arroz 1/	385 843	438 027	(13,5)	52 184	2 287 374	2 051 157	2 469 515	20,4	418 349,3
Maíz	505 752	400 673	(20,8)	(105 079)	1 694 345	1 803 039	1 471 026	(18,4)	(332 013,0)
Sorgo 2/	5 325	3 260	(38,8)	(2 055)	36 038	23 853	15 101	(35,7)	(8 762,0)
Cebada 2/	6 179	4 076	(34,0)	(2 103)	12 978	13 858	8 137	(41,3)	(5 731,0)
Trigo 2/	7 363	5 335	(27,5)	(2 028)	15 932	17 331	9 891	(42,9)	(7 400,0)
<b>OLEAGINOSAS</b>	69 481	53 002	(9,3)	(5 479)	125 052	129 759	118 691	(8,5)	(11 057,7)
Semilla Algodón 3/	31 945	29 130	(8,8)	(2 815)	33 375	42 174	38 207	(9,4)	(3 955,6)
Soya	32 010	28 330	(11,5)	(3 680)	85 942	81 688	74 530	(8,8)	(7 158,0)
Ajonjolí	2 810	2 810	-	-	2 542	2 670	2 699	1,1	29,2
Maní	2 715	2 732	0,6	17	3 191	3 227	3 255	0,9	27,6
<b>OTROS CULTIVOS</b>	392 140	375 285	(4,3)	(15 854)	4 805 724	4 555 155	4 753 528	2,1	98 373,2
Algodón Fibra 3/	31 946	29 130	(8,8)	(2 815)	23 783	30 710	23 700	(22,8)	(7 009,9)
Papa 4/	125 780	122 120	(2,9)	(3 660)	2 654 000	2 490 800	2 695 660	8,3	205 850,0
Frijol	109 912	103 373	(5,9)	(6 539)	136 903	144 180	132 322	(8,2)	(11 858,0)
Tabaco Rubio	6 223	5 519	(11,3)	(703)	13 627	11 574	10 053	(13,1)	(1 520,9)
Hortalizas	118 279	115 143	(2,7)	(3 136)	1 958 410	1 987 891	1 900 891	(4,4)	(87 098,0)

Pr: Datos preliminares sujetos a cambio.

1/ información DANE-Fedearroz, producción en términos de paddy verde.

2/ Información Fonalce.

3/ Información Conalgodón.

4/ Información Consejo Nacional de la Papa.

Fuente: Gremios de la producción y gobierno. Cálculos: SAC

El alza que se propuso en el presupuesto para el agro es apenas del 6 % para el próximo año, y la capacidad de ejecución del Estado en ese campo es muy baja. En este ámbito, se incluye el compromiso pactado con la movilización social del contundente paro agrario de 2013. Así, el promedio de presupuesto efectivamente ejecutado por parte del Ministerio de Agricultura en los últimos dos años ha sido de apenas 59 %, lo que demuestra el poco interés que realmente se le está otorgando al tema. El cuadro 3 ilustra el mismo fenómeno a partir del año 1990.

---

### Con la apertura económica de la década de los noventa se le declaró la guerra a la economía del agro en Colombia, y a partir de ahí la capacidad de producción nacional ha disminuido.

---

Por otra parte, es importante hacer un énfasis sobre la clase media en Colombia. La definición de ese concepto varía: si bien para el Banco Mundial implica un rango de población que puede llegar a devengar entre USD 10 y 50 diarios, para las mediciones que se han hecho en Colombia se ha asumido un rango más alto (varía también según el estudio), que se refiere a población que devenga más de USD 1 800 mensuales. El

Gobierno nacional afirmó en 2016 que en los últimos 5 años, 4 600 000 colombianos salieron de la pobreza y entraron en el rango de la clase media y, de ellos, 3 800 000 lo son de manera estable (no necesariamente superan el rango de los USD 1 800 mensuales, sino que han salido de la pobreza). Estudios realizados por el Banco Mundial en el año 2013 indican un aumento de entre el 15 % y el 28 % de la clase media en los 10 años anteriores al estudio. Todos los estudios concuerdan en que esa expansión coincide también con un aumento en los créditos entre el 30 % al 35 % en los últimos 15 años. También coinciden en que ese ‘ascenso’ social es de condición vulnerable e inestable, pues la economía del país es también inestable.

Eso inscribe a Colombia en una situación de riesgo en cuanto a la baja capacidad de sostener dicho crecimiento,<sup>2</sup> aunque el Gobierno Nacional se ha esforzado en contradecir esa versión al plantear que el país tiene la capacidad de sostener el crecimiento y que la época de postacuerdos o posconflicto significaría un crecimiento de 1,5 % en el PIB, que se vería reflejado en el fortalecimiento de la clase media. También es importante tener en cuenta que en el sentido común de la población y en algunas mediciones estadísticas se hace distinción entre la clase media alta y la clase media baja, evidenciando una brecha interna importante entre la población que se ubica en esa franja. Por otro lado, teniendo en cuenta el alto nivel de informalidad de la economía

---

2. En 2013, el entonces decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, sostenía “la fragilidad de una economía basada en materias primas; una carga tributaria en alza; la creciente dependencia de las exportaciones del petróleo y la minería; una golpeada industria manufacturera que en 1991 exportaba 30 millones de dólares en calzado y ahora solo un millón. Y para rematar: una informalidad laboral entre el 50 y el 60 por ciento” (<http://www.finanzaspersonales.com.co/trabajo-y-educacion/articulo/clase-media-colombia-fragil-pero-crecimiento/48836>).

en Colombia, el crecimiento en los ingresos también se debe en parte al crecimiento de este tipo de economía; en esta tendencia, es importante pensar en el peso de la economía del narcotráfico.

Es evidente que el país no tiene una elaboración clara sobre qué y cómo es la clase media, y cae en lugares comunes o estadísticas que pueden citarse y acomodarse de acuerdo con la situación y lo que haya que justificar. Si se coloca en el centro de la discusión alguno u otro de los factores más comunes para la definición de clase media (mejora de ingresos, estabilidad económica, mejora en el acceso y condiciones de la educación para capas de la población, relación formal con el estado y el mercado, mayor capacidad de consumo, entre otros), el análisis cambia también, pero es claro que la relación de todos esos factores no se da de manera integral.

*La permanencia de las mismas élites políticas regionales y nacionales.* Según Francisco Leal Buitrago, en su texto *Siete tesis sobre el relevo de las élites políticas*, “a pesar de los cambios estructurales que han ocurrido, sobre todo en el siglo XX, no se han alterado la alta concentración de la riqueza ni el ingreso. Este es un indicador fundamental para apreciar la ineficacia democrática de las élites en el país” (2007, 4). En este sentido, no hay control ni capacidad de exigir a las élites un comportamiento, porque la manera en la que están aferradas al poder está garantizada a partir de su coincidencia y alianza con los sectores económicos más poderosos, así como en la ineficiencia total y apoyada en la institucionalidad para garantizar las reglas de juego de la democracia, y de la legalidad en general, que hace que la imbricación entre élites políticas e ilegalidad sea muy alta en todos los niveles.

En el ámbito nacional, la irrupción de Álvaro Uribe en el campo político, con sus candidaturas presidenciales victoriosas en 2002 y en 2006, fue un intento de generar un “proyecto alternativo de Estado” (al de las élites tradicionales), que abrió el espacio político para quienes generaron riqueza de manera ilegal, a través del paramilitarismo y el narcotráfico. Dicho intento de ‘diversificar’ el escenario de las élites políticas fue trágico para el país. Otros intentos y logros se han dado desde procesos y liderazgos democráticos y de izquierda. Nariño y Bogotá son dos de los territorios donde se ha ido consolidando (con altibajos) un liderazgo político e institucional distinto; otros departamentos y ciudades se han ido abriendo lugar en ese sentido, pero aún en mínima proporción en el país.

## 2. El escenario político

Para entender el escenario político actual en Colombia, es necesario establecer un contexto extendido en el tiempo, partiendo por un momento que se identifica como punto de quiebre. En 2002 llegó al Gobierno Nacional Álvaro Uribe Vélez, con una visión autoritaria, de concentración del poder, privatización y guerra total a las insurgencias y a lo que le oliera a alternatividad o subversión, así como la legalización y legitimación al paramilitarismo, la aparición de falsos positivos, casi 4 millones de desplazados, entre otros puntos. Alrededor de él se construyó un bloque político amplio pero obediente (incluida una buena parte del actual Gobierno). Además, aquellos que, al ser parte de la política tradicional, no estaban plenamente de acuerdo optaron por un silencio cómodo. Para posibilitar un rediseño del campo político y concentrar fuerzas, Uribe promovió una Reforma

Política en 2003, que obligaba a jugar con un umbral electoral estrecho (para las elecciones legislativas) que privilegiaba a los partidos y movimientos políticos con mayor capacidad electoral y castigaba a las minorías (vigente hasta hoy).

Con el fin de preparar la reelección de Uribe, surgió el partido de la U (cuyo nombre oficial era Partido Social de la Unidad Nacional, pero para la mayoría significaba “con Uribe”), que agrupó a muchos de quienes estaban con el entonces Presidente. Se mantuvieron los partidos Liberal y Conservador tradicionales y se venía fortaleciendo también Cambio Radical, hoy liderado por el actual vicepresidente, Vargas Lleras, que había surgido como una división del Partido Liberal a comienzos de los 2000, pero que había apoyado a los sectores más de derecha de los conservadores en 1998 (con Andrés Pastrana) y a Uribe en su reelección. En el campo de la política tradicional, el Partido Liberal, liderado por una de sus alas clásicas encabezada por Horacio Serpa y Ernesto Samper, representaba al sector de la élite tradicional política que se oponía a Uribe; así, lo enfrentó electoralmente para que no saliera reelegido, aunque fracasó en su intento, pues gran parte de quienes solían apoyar a los liberales se habían escindido hacia el partido de la U y Cambio Radical.

El escenario de la construcción de movimiento y movilización social fue álgido y doloroso. Se venía manifestando en un escalamiento de la capacidad de movilización en la década de los noventa, motivada en gran parte por las injusticias y desigualdades que provocó que el país asumiera el modelo neoliberal. Las administraciones de Uribe profundizaron dicho modelo, pero además generaron una ola

de represión muy alta, con un saldo trágico en muchas regiones, donde la gente tenía que ocultar sus simpatías políticas o condiciones de organización por pertenecer a una u otra organización social o política de izquierda. Los sindicatos de maestros, y los movimientos estudiantil, indígena, de mujeres y de campesinos fueron protagonistas del escalamiento de la movilización, así como los más golpeados por el régimen.

---

**Los sindicatos de maestros, y los movimientos estudiantil, indígena, de mujeres y de campesinos fueron protagonistas del escalamiento de la movilización, así como los más golpeados por el régimen.**

---

Por otra parte, fuera de la élite tradicional, quienes públicamente estaban en desacuerdo con la figura, con las formas y los contenidos de lo que representaba y proyectaba Uribe se aglutinaron en una red/bloque de solidaridad y acción. En 2002 surgió el Polo Democrático Independiente (PDI), como heredero de la Alianza Nacional Popular (Anapo), la Alianza Democrática M-19, sectores sindicales y de organizaciones sociales. El PDI lanzó la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón en 2002 y en 2003 logró llegar a la Alcaldía de Bogotá; era la primera vez que un movimiento alternativo de izquierda/socialdemócrata llegaba al segundo puesto más importante del país.

En el año 2005 surgió el proyecto del Polo Democrático Alternativo (PDA), que juntó al PDI, al Frente Social y Político (sector que unía a la izquierda colombiana, a los movimientos sociales) y a Alternativa Democrática (sector político del hoy senador Jorge Robledo). El PDA se congregó en torno a una propuesta de programa mínimo, “ideario de unidad”, y de una estrategia electoral. Este bloque plural logró posicionarse rápidamente como la imagen de la ‘otra posibilidad’ para Colombia, que se reflejó en las elecciones parlamentarias, donde alcanzó una amplia bancada (en las dimensiones colombianas, 10 escaños de 100) y quedó segundo en las elecciones presidenciales con Carlos Gaviria, que obtuvo 2 613 157 votos, algo nunca antes logrado por un sector expresamente de izquierda(s). Mientras tanto, en las elecciones de poder local, la izquierda venía ganando fuerza, varias gobernaciones y un segundo mandato al frente de Bogotá mostraban que mucha gente estaba cansada de la política tradicional y de la represión.

La época de Uribe se acabó después de que este intentó perpetuarla al tratar de aprobar la posibilidad de una segunda reelección presidencial. Se reacomodaron las fuerzas y las élites políticas colombianas hicieron un nuevo pacto, la Unidad Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, que pronto dejó a Uribe a un lado. La Unidad Nacional definió cinco ejes estratégicos para la economía (de ellos): Agricultura, Vivienda, Minería, Infraestructura e Innovación. El anuncio y posterior desarrollo (más real que nunca en la historia reciente del país) de la búsqueda de la construcción de paz a través de negociaciones con las insurgencias fue el punto de quiebre de la Unidad con Uribe,

quien se vio en la necesidad de estructurar su propia fuerza política, leal únicamente a su liderazgo, el Centro Democrático.

En una mirada profunda, Santos y Uribe (y lo que representan) están parados del mismo lado del ajedrez, pero al mirar la filigrana, este momento y su configuración política y económica los separa. Los sectores de la gran economía del país y la multinacional que expresan son distintos; Santos representa los sectores más ‘modernizadores’ de la economía nacional y Uribe representa a una buena parte de los grandes terratenientes, pero también a algunos sectores de la economía nacional que se han visto golpeados por las políticas de libre comercio (aunque él mismo promovió los TLC). Hoy, sin duda, gran parte de los actores económicos multinacionales que están en el país se han alineado con Santos.

El quiebre también se presentó dentro de la izquierda, y los detonantes para que esto ocurriera fueron principalmente dos. El primero fue la segunda alcaldía del PDA, con Samuel Moreno al frente, que estaba generando serios problemas, pues era acusada de corrupción; esta falla fue manejada ágilmente por las capas tradicionales de la política, lo que la convirtió en el referente nacional de la corrupción. Dentro del PDA, esto generó posturas distintas, entre quienes pensaban que inmediatamente había que denunciar y separar a Moreno y a su hermano del partido (sector liderado por Gustavo Petro y sectores independientes como Fuerza Común y procesos regionales, opción que se concretó a través de una decisión de la Comisión de Ética del Partido), quienes decían que había que esperar decisiones de la justicia primero para no reaccionar sobre acusaciones (el sector más cercano a Moreno) y quienes le restaban

importancia a la crítica para no evidenciar las fallas y problemas del partido (sector del senador Robledo y Partido Comunista).

Por otra parte, una vez por fuera Uribe del Gobierno, uno de los denominadores comunes más fuertes de quienes estaban en el PDA como oposición y voz divergente única en el país, las opciones políticas en el país se volvieron a barajar. Ser oposición ya no era lo mismo, surgieron más y más voces críticas a Uribe distintas al PDA y se abrió la baraja política. En el PDA algunas voces planeaban necesidades de cambio y redefinición de horizontes políticos más allá de lo que habían sido estos años de resistencia y denuncia, otras se abrazaban a lo ya definido y planteaban que la situación política y la composición de las élites no había cambiado. En el fondo, más allá de la discusión política del futuro del PDA, las proyecciones y aspiraciones políticas propias de cada sector eran distintas y, en vez de buscar generar un consenso en la diversidad, se optó por la división o ‘depuración’ (unos haciendo mayorías para expulsar a otros, una y otra vez).

Las distintas posturas referidas a cómo entender el nuevo momento político, las alianzas y el alcance en la construcción de gobierno generaron enemistades y competencias, basadas en los debates y posturas, que se extendieron más allá de la ‘sana discusión’ e involucraron ámbitos de la vida cotidiana y del comportamiento político, lo que generó sentimientos de ‘desprecio’ de los unos hacia los otros y revivió ‘imposibilidades’ para estar juntos, argumentos que habían nacido en las décadas de los ochenta y noventa. Pocos sectores independientes se negaron a entrar a esa lógica de ‘carnibalismo político’, e intentaron promover estrategias de renovación y fortalecimiento

del partido. Estos gritos tenían mucho eco entre las bases y simpatizantes del partido y poco entre los dirigentes que tomaban las decisiones sobre el actuar político.

En un partido que había nacido con base en la más amplia de las diversidades en el campo de la izquierda, esa misma diversidad parecía ser entre 2010 y 2011 imposible e indeseable, pues cada uno de los sectores en puja parecía sostener que estar con los demás le impedía desarrollarse. Después de haber generado un debate interno sobre la proyección del partido y su ordenamiento interno del poder, el primero en salir fue el sector identificado como progresista, que apoyaba a Gustavo Petro, quien ganó la Alcaldía de Bogotá y se convirtió en el tercer alcalde de la ciudad con raíces de izquierda, aunque ya fuera del PDA, mientras el candidato oficial de este partido sacó apenas 30 000 votos en una ciudad de 8,5 millones de habitantes.

Poco tiempo después, quienes se habían juntado para debatirle al sector progresista su visión de crítica a la corrupción y de articulación más amplia del partido, se dividieron nuevamente por una discusión en torno al rumbo del partido, en este caso frente a la relación que debía tener con otras organizaciones sociales y políticas del campo de la izquierda y frente la importancia y prioridad de empezar a empujar el tema de paz y negociación política entre Gobierno e insurgencias. En consecuencia, el partido comunista y los sectores que lo acompañaban fueron expulsados, acusados de doble militancia.

Ante esta coyuntura, el PDA se redujo y se encerró, mientras había en el país un ánimo y una expectativa que empezó a crecer frente a la posibilidad de pactar la paz con las guerrillas. Para el segundo período

presidencial de Santos, este tema se había vuelto un propósito nacional, con Uribe como 'oposición', con una capacidad de invisibilizar los temas de modelo económico y con la fuerza suficiente para hacer que casi todas las versiones de la izquierda apoyaran a Santos en segunda vuelta presidencial, contra el candidato de Uribe. El país se empezó a polarizar entre la paz y la guerra, y la izquierda formal perdió espacio político como partido (mientras algunos líderes del PDA lo ganaron como personajes), al no saberse ubicar con suficiente fuerza en ese debate; al mismo tiempo, la élite política tradicional empezó a renovar sus caras y discursos.

En la primera parte de la década de 2010 nacieron dos movimientos muy importantes: el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. El Congreso de los Pueblos surgió de la trayectoria de la Minga Social y Comunitaria, que a partir de 2006 movilizó a sectores indígenas, de mujeres, campesinos, estudiantiles y juveniles y urbanos. Este movimiento nació para cualificar la movilización y darle horizonte de propuesta de país, y convocar a todos los inconformes a asumir un mandato y empezar a legislar desde sí mismos para cambiar el país. La Marcha Patriótica surgió dos años más tarde y recogió también a diversos sectores campesinos organizados en torno a las Zonas de Reserva Campesina, estudiantiles/juveniles, sindicales y urbanos. Junto con sectores políticos como el Partido Comunista y el liderazgo por Piedad Córdoba, la Marcha se propuso poner la movilización de protagonista de la política, buscando integrar 'lo político' y 'lo social', y generar potente iniciativa popular hacia la consecución de la paz. Además de estos dos movimientos, surgieron y se

potenciaron actores sociales que se movilizaron en varias regiones.

Ante las dificultades y crisis de la izquierda formal, la movilización social generó la diferencia. Los paros agrarios, muy potentes en 2013 y 2016, sacudieron el país y evidenciaron que a pesar de que todos estaban de acuerdo en el propósito nacional de paz, el modelo económico y de 'desarrollo' en general era contradictorio, pues seguía empobreciendo a los más pobres, potenciando la corrupción y alimentando una cultura política clientelar. La Cumbre Agraria y las Dignidades Agrarias surgieron como expresiones de los sectores del campo que se movilizaron y, a pesar de que no lograron ponerse de acuerdo (entre otras razones, por mediaciones cerradas de la política tradicional de la izquierda), se convirtieron en símbolo y representación de lucha bien vista por la sociedad.

---

### Ante las dificultades y crisis de la izquierda formal, la movilización social generó la diferencia.

---

La lucha social en Colombia tiene mucho reconocimiento, legitimidad y tradición. En un país en el que gran parte del territorio está aún vetado para el Estado y donde este se ha mostrado poco interesado en las realidades y en vida social real, la gente ha construido una tradición muy fuerte para 'resolver las cosas' por sí misma, asumiéndose como única responsable de su destino y mejoramiento de condiciones de vida. Esto implica varias cosas. Por una parte, que se despiertan y consolidan

lazos de solidaridad colectiva para la gestión de asuntos cotidianos comunes (por ejemplo, la instalación de los servicios públicos, la vida comunal, la educación), que trascienden muchas veces a niveles de organización sólidos y permanentes centrados en la gestión de la vida social y en la generación de autonomías sociales que hoy deben ser reconocidas como constructoras de país. Lamentablemente, en la mayoría de lecturas de análisis de país, esas autonomías no son reconocidas, pues gana la visión del Estado fallido o incompleto que no es lo suficientemente explicativa en el caso colombiano.

Otra implicación importante de la manera en la que se han construido esas gestiones propias de lo social y esas autonomías organizadas es que la mayoría de veces plantean la negación y la confrontación con lo que entienden que es la política en el país. Implica también una sólida experiencia en movilización y protesta, que estalla cada vez que se siente con fuerza lo que no se puede resolver por uno mismo; según un estudio que realizó el investigador Mauricio Archila, publicado en el año 2005, entre 1958 y 1990 en Colombia se presentaban 1,5 protestas sociales diarias.

Volviendo al campo de la política formal, en el año 2005 había surgido el partido Opción Centro, liderado por sectores socialdemócratas que no confluyeron en el PDA. Ante el fin de la época uribista en el Gobierno, en 2009 se formalizó como Partido Verde y convocó a figuras como Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, cuyo perfil siempre se había presentado como técnico, gerencial e 'independiente', ambos fueron alcaldes de Bogotá y tenían la intención de lanzarse a candidaturas presidenciales. Ante la ruptura y diferencias

en el seno del PDA, sectores de Progresistas se desplazaron hacia el Partido Verde, convirtiéndolo en Alianza Verde.

De la misma manera, había surgido País Común, entre sectores independientes y vinculados a la movilización social que se habían distanciado del PDA (Fuerza Común) y buscaban generar nuevas formas de vocería política desde lo regional y organizaciones sociales indígenas y campesinas. También, la Unión Patriótica, expresión política que había surgido en los años ochenta de la mano de las negociaciones de paz con las FARC, en aquel momento recuperó su personería política oficial como parte de un proceso de reparación a víctimas y se relanzó al escenario político. Ante la negativa del PDA de generar nuevas confluencias, esos sectores confluyeron en una gran Convergencia por la Paz y de esa manera participaron en las elecciones de 2013.

Es importante mencionar en este mapa de actores políticos a los partidos indígenas ASI, AICO y MAIS, que han sido parte de los partidos políticos alternativos, aunque su carácter exclusivamente para competir por las curules indígenas del Parlamento (en los últimos años solo lo conservan AICO y MAIS) impide que las estrategias de convergencia en el campo alternativo se concreten también electoralmente. En la mayoría de ocasiones, quienes han llegado a las curules indígenas han sido aliados o cercanos a la política de oposición y crítica al establecimiento. No pasa lo mismo con las agrupaciones que se organizan para aspirar a las curules afro y alcanzarlas, la mayoría de veces plegados a la política tradicional. Esta situación tiene que ver con las diferencias en los procesos organizativos y políticos entre pueblos indígenas y afros en Colombia.

La confluencia en torno al PDA solo fue nuevamente posible debido a la candidatura de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. Esta perdió las elecciones y nuevamente la derecha se ubicó al frente de los destinos de la capital colombiana, echando atrás 12 años de avances programáticos y de políticas públicas desde los gobiernos distritales. Esa parecía ser la última coyuntura que podía generar una articulación más allá de la pragmática pura en el campo de la izquierda que parió el PDA. Hoy las estructuras partidarias existen, pero la mayoría de sectores de la izquierda, progresismo, socialdemocracia, sectores del movimiento social y personajes representativos y generadores de opinión crítica parecen tener la mirada puesta en puntos distintos y apostar a la libertad de reagrupación que puede brindar la reforma política que surgirá muy pronto como consecuencia de uno de los puntos de acuerdo de las negociaciones de La Habana. Esa misma reforma traerá posibilidades de participación política regional autónoma de los escenarios nacionales, hecho que también tendrá efectos en la fuerza de la política alternativa.

Cinco candidaturas presidenciales probables desde el sector alternativo/izquierda suenan para las elecciones de 2018 y cada una está construyendo una lectura distinta de qué y cómo hay que gobernar. Algunos tienen la mirada de buscar un gran gobierno de transición con los sectores tradicionales que le apostaron a la paz y con mayor participación de la izquierda para garantizar compromiso de la oligarquía en la implementación de los acuerdos de paz; otros piensan que la clave es que próximamente haya un gobierno alternativo, y otros que ese gobierno alternativo debe construirse con todos los sectores empresariales nacio-

nales perjudicados por la política de libre comercio, más allá de sus posturas políticas en otros temas. Hallar un punto de convergencia no está fácil y seguramente la pragmática para garantizar una buena participación parlamentaria terminará siendo nuevamente un criterio de 'encuentro', también algunas voces han planteado la necesidad de promover una consulta entre los candidatos alternativos para definir una sola persona que vaya a la contienda general.

Finalmente, también hay gran expectativa por el rumbo que tomarán las FARC, ya como movimiento político sin armas, sabiendo que ya tienen unas garantías de participación en los espacios de elección popular. Asimismo, existe gran preocupación por la dilación para instalar el diálogo formal entre el Gobierno Nacional y el ELN, la segunda guerrilla más grande del país, hecho que podría convertirse en la excusa para perpetuar dinámicas de la guerra y políticas similares a las de la década de los 2000.

En la otra orilla, se ha generado una renovación de caras, discursos y estilos en los sectores tradicionales, milimétricamente calculada en torno a la expectativa de la construcción de paz, mostrándose como la opción para gobernar el 'nuevo' país. En clave de Unidad Nacional, probablemente el actual vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se convierta en el candidato presidencial que junte a la élite a su alrededor, no antes de generar varias candidaturas desde ese mismo sector para tensionar y negociar, apostando así a liderar la 'reconstrucción' del país después de la guerra.

Asimismo, hay varios sectores (algunos provenientes de procesos de izquierda y progresistas o del campo de la socialdemocracia y otros de sectores más cercanos

a posturas de derecha pero con independencia de la política tradicional) que se disputan el campo del llamado 'centro político'. Estos construyen una imagen independiente de la política tradicional, lejos de la corrupción, técnicamente cualificada y capaz, y políticamente creativa y fuera de los clichés de la izquierda y la derecha. Ese escenario es más tensionado, pero también el que visiblemente genera más expectativa en las encuestas y demás indicadores de la opinión pública.

### 3. Reflexiones generales

---

Los espacios regionales se convertirán en escenarios fundamentales de posicionamiento de proyectos alternativos.

---

El momento de la paz se ha convertido, en el sentido común de una parte de la población y en el escenario político, en sinónimo de oportunidad de cambio de realidades sociales, pero también de cambio en la política y las formas de gobierno. Aún no tienen rostro, pero, en gran medida, la izquierda ha perdido esa representatividad y tendrá que encontrar un camino colectivo para volver a ser una opción para el país. A la izquierda le va mejor cuando se junta, pero debe hallar otras claves para juntar, no desde la presión de poder jugar con las reglas electorales que hay ni desde el 'ser oposición' a secas, sino interpretando el momento y volviendo a generar expectativa y legitimidad entre la gente y

capacidad de hablar y convocar más allá de sí misma.

Por otro lado, los espacios regionales se convertirán en escenarios fundamentales de posicionamiento de proyectos alternativos, y los movimientos y organizaciones sociales tendrán que reconocer dicha posibilidad y oportunidad.

**NOTAS PARA UNA REFLEXIÓN  
COLECTIVA SOBRE LA SITUACIÓN  
VENEZOLANA**

---

Edgardo Lander

# Notas para una reflexión colectiva sobre la situación venezolana

Edgardo Lander<sup>1</sup>

Caracas, agosto 2016

## 1. Un país en crisis

En un momento de profunda crisis y de significativos reacomodos de la sociedad, resulta difícil señalar, con algún grado de confianza, cuáles son las perspectivas en Venezuela ni caracterizar los fluidos reacomodos que están operando en los diferentes sectores de la sociedad. Han sido tan acelerados los cambios operados en el país durante los últimos tres años, particularmente durante el último año, que la mayor parte de las estadísticas que se divulgan ya están viejas cuando se dan a conocer. Es difícil caracterizar la propia estructura económica del país en momentos en que un grueso bloque de la economía está constituido por el denominado 'bachaqueo', una miríada de actividades informales, con frecuencia ilegales, a veces mafiosas, donde

es posible encontrar desde contrabando en gran escala, especulación, acaparamiento, hasta mecanismos de subsistencia popular.

Venezuela vive el agotamiento del patrón productivo petrolero rentista del último siglo. Enfrenta, igualmente, amplios procesos de transformaciones políticas, sociales y culturales, y un panorama de extraordinaria incertidumbre en relación con el futuro. El país, en el contexto de la crisis capitalista global, está pasando por un momento de inflexión. Lo que no está claro es si es posible iniciar la transición hacia una Venezuela postpetrolera y postrentista, o si, por el contrario, con el Arco Minero del Orinoco, las élites políticas y económicas del país y las empresas transnacionales tendrán éxito en sus intentos de empujar al país en la dirección de un nuevo modelo rentista: el minero, aún más depredador. No es posible, por lo tanto, formular sino muy tentativamente proyecciones a futuro a partir de las tendencias que han venido operando hasta el momento.

---

1. **Edgardo Lander.** Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Becario del Instituto Trasnacional (TNI), Ámsterdam. Involucrado en forma directa en la dinámica de los Foros Sociales Mundiales. Integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. En Venezuela actualmente forma parte de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.

## **2. Extraordinarios cambios en las condiciones de vida de la población en los primeros tres lustros del proceso bolivariano**

La población venezolana pasó de 23 710 809 habitantes en el primer semestre de 1999 a 30 337 439 habitantes en el primer semestre de 2015.

### **2.1. Reducción de la pobreza y la desigualdad**

De acuerdo con las formas en que se miden estos asuntos en las estadísticas oficiales, entre los años 2000 y 2013, la tasa de pobreza por ingreso se redujo de 44 % a 32 % de la población, y la tasa de pobreza extrema, de 18 % a 9,8 % (Cepal, 2016). Los hogares en extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas se redujeron a la mitad entre 1998 (10,8 %) y 2014 (5,4 %) (MPPP, 2015). Además, el índice de Gini varió de 0,468 a 0,407 entre esos años (Cepal, 2016). Según cifras oficiales, “en 1998, la razón entre el porcentaje de ingresos del 20 % más rico y el 20 % más pobre era de 13 veces, en tanto que en 2014, ese indicador se ubicó en 7,3 veces” (MPPP, 2015). A partir del año 1999 y hasta el año 2014, el ingreso mínimo legal fue superior al costo de la canasta alimentaria normativa (Ibíd). De acuerdo con cifras de la FAO, el Índice de prevalencia de desnutrición bajó de 21 % en el período 1998-2000 a menos de 5 % en el período 2011-2013 (cit. en MPPP, 2015). La esperanza de vida al nacer pasó de 72 años en 1998 a 75 años en 2014. El Índice de desarrollo humano pasó de 0,68 en el año 2000 a 0,76 en el año 2013 (Ibíd).

### **2.2. Empleo por sector de la economía, niveles de empleo/desempleo**

Entre el primer semestre de 1998 y el primer semestre de 2015, la población económicamente activa pasó de 9 699 330 a 14 167 281, un incremento de 46 % (INE, 2015). La población económicamente activa en las ocupaciones agrícola, pecuaria y caza bajó de 884 546 en el primer semestre de 1999 (10,2 % del total) a 873 206 (6,7 % del total) en el primer semestre de 2015 (Ibíd). La población económicamente activa en la industria manufacturera aumentó en términos absolutos de 1 368 693 en el primer semestre de 1999, a 1 640 380 en el primer semestre de 2016, lo que representa un incremento de 19,9 %. Sin embargo, en términos relativos, se produjo una reducción significativa en la participación de la actividad industrial en el total de la población económicamente activa, pues bajó de 14,1 % en 1999 a 11,6 % en 2016.

Los incrementos mayores en la población económicamente activa se dieron en servicios comunales, sociales y personales (pasaron de 28,6 % a 32,4 %); en transporte, almacenamiento y comunicaciones (de 7 % a 8,9 %), y en establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles (de 5,3 % a 6,2 %) (Ibíd). La tasa de desempleo, mientras tanto, bajó de 10,6 %, en diciembre de 1999, a 5,5 % en diciembre de 2014 (MPPP, 2015).

### **2.3. Empleo formal e informal, el empleo público, la seguridad social**

Los dos cambios más significativos en la composición de la fuerza de trabajo entre esos años fueron la reducción del empleo informal (definido como empleo en unidades

de cinco o menos trabajadores), y en el aumento del empleo en el sector público.

El sector formal de la economía representó el 49 % de la población de 15 años o más ocupada en el primer semestre el año 1999. Esto se incrementó a 59,5 % en el primer semestre del año 2015 (INE, 2015). La población ocupada en el sector público pasó de 1 348 181 en el primer semestre de 1999 a 2 713 324 en el primer semestre de 2015. En términos porcentuales, esto representa 15,5 % y 20,7 %, respectivamente, del total de la población ocupada (Ibíd).

La tasa de actividad de la población de más de 15 años pasó de 66,8 %, en el primer semestre del año 1999, a 64,1 %, en el primer semestre del año 2015. Mientras la tasa correspondiente a los hombres tuvo un descenso de 66,8 % a 64,1 % entre esos años, para las mujeres permaneció prácticamente inalterada (50,3 % y 49,7 %). Además de la mayor proporción de mujeres estudiantes, esto se debe a que, a pesar de una baja importante respecto a la población femenina de 15 años o más, sigue siendo elevada la proporción de mujeres dedicadas a los quehaceres del hogar: 35,1 % en 1999 y 28,5% en 2015. Esta sigue siendo una actividad casi exclusivamente femenina, 98,1 % de las personas que afirman dedicarse a oficios del hogar son mujeres (Ibíd).

Entre los años 1998 y 2014, la cantidad de personas pensionadas pasó de 387 007 a 2 565 725. La proporción de personas pensionadas entre la población con derecho a pensión (mujeres de 55 años y más, y los hombres de 60 años y más) pasó de 19,6 % en el año 1998 a 72,6 % en el año 2014 (MPPP, 2015). Se igualó el salario mínimo rural con el salario mínimo urbano, y se establecieron protecciones laborales

tanto para las y los conserjes, como para las y los trabajadores domésticos.

#### **2.4. Incremento en el nivel educativo de la población, en particular de la población femenina**

Entre 1998 y 2014, los años de escolaridad promedio de la población pasaron de 7,35 a 9,57 (Ibíd). Entre el primer semestre de 2002 y el primer semestre de 2015, la proporción de la población económicamente activa de 15 años o más analfabetos o sin nivel educativo bajó de 6,2 % a 2,4 %. La cobertura en educación universitaria se incrementó de 862 862 estudiantes, en el año 2000, a 2 629 312 en 2013 (Ibíd). Entre esos años, la proporción de la población económicamente activa con título universitario más que se duplicó, al pasar de 11,3 % a 24,8 %. El porcentaje de la población ocupada con títulos universitarios pasó en esos años de 11,8 % a 24,7 %. Llama la atención que un título universitario no aumenta la probabilidad de estar ocupado. Entre los desocupados, la proporción con título universitario fue similar (25 %) a la participación de la población con título universitario en la población ocupada (INE, 2015).

Por otro lado, el porcentaje de estudiantes de la población de 15 años o más en el primer semestre del año 1999 fue de 10 %. En el primer semestre del año 2015 fue de 12 %. Es muy marcada la diferencia por sexo. Entre los mismos años, la proporción de mujeres de 15 años o más estudiando pasó de 11,2 % a 19 %. Para los hombres, la variación fue de 8,6 % a 11 %. En el primer semestre de 1999, 30 % de la población entre los 15 y los 24 años se encontraba estudiando; mientras que para el primer semestre de 2015, la cifra había subido a 45,3 % (hombres 41,1 % y mujeres 49,7 %).

Todo esto fue financiado gracias a los elevados precios del petróleo y lo que, por la vía de los hechos, más allá del discurso, terminó siendo una decisión estratégica gubernamental de optar por preservar la estructura económica del país y profundizar la dependencia en el rentismo, y, a corto plazo, aprovechar al máximo la bonanza petrolera. Han sido tan dependientes, tanto el funcionamiento de la economía como la legitimidad del Gobierno, de estos elevados ingresos, que, cuando colapsaron los precios del crudo en el mercado internacional y en ausencia total de reservas para enfrentar esta situación, entró en crisis el proceso.

### **3. ¿Cómo ha cambiado la configuración de los diferentes sectores de clase?**

#### **3.1. Sectores empresariales tradicionales y la emergencia de nuevos sectores militar-civiles del capital**

Durante los años del proceso bolivariano se han producido significativos reacomodos y desplazamientos en las élites económicas del país. En relación con los sectores anteriormente dominantes, uno de los cambios más significativos ha sido la profundización de la lógica rentista y un aún mayor desplazamiento hacia actividades no directamente productivas como las importaciones, el comercio, las financieras y las telecomunicaciones, así como actividades ilícitas de especulación y contrabando. Políticamente, los sectores tradicionales del empresariado, a través de sus principales organismos gremiales (Fedecámaras,

Consecomercio, Fedeindustria, Fedeaagro y la Asociación Bancaria), han constituido un sólido frente de oposición al Gobierno.

---

### **Durante los años del proceso bolivariano se han producido significativos reacomodos y desplazamientos en las élites económicas del país.**

---

La fuente principal de acumulación privada de estos años ha sido producto de la combinación de muy elevados precios del petróleo y de los extraordinarios niveles de corrupción que han sido favorecidos por la enorme disparidad (hasta de cien a uno) entre el precio oficial subsidiado de las divisas y su precio en el mercado paralelo ilegal. De acuerdo con Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de USD 59 000 millones en divisas subsidiadas entregados solo en un año, en 2012, unos USD 20 000 millones fueron entregados a “empresas de maletín”, una “demanda artificial no asociada a actividades de producción”.<sup>2</sup> El exministro del Gobierno del presidente Chávez, Héctor Navarro, estima que “unos 300 millardos de dólares del billón de dólares ingresado entre 2003 y 2012 han desaparecido de las arcas de la nación, sin haberse castigado a los responsables” (Armas, 2015). A esto se agregan las comisiones generalizadas existentes en las contrataciones públicas, y los negocios derivados del control de los puertos y la distribución de alimentos. En estos

---

2. “Presidenta del BCV: Parte de los \$59.000 millones entregados en 2012 fueron a ‘empresas de maletín’”, Aporrea/AVN - [www.aporrea.org](http://www.aporrea.org), Caracas 25 de mayo 2013.

masivos desfalcos han participado tanto funcionarios públicos como empresarios tradicionales y emergentes. Estas actividades han sido privilegiadas para el surgimiento de un nuevo sector empresarial civil y, sobre todo, militar, ligado al Gobierno, la que ha sido denominada 'boliburguesía'.

Un nuevo ámbito de acumulación (y de poder político) para los militares fue decretado en febrero de 2015 por el presidente Maduro mediante la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas.<sup>3</sup>

### 3.2. Sectores medios

Políticamente, este sector de la población, desde relativamente temprano, vio al proceso bolivariano como una amenaza a sus intereses y privilegios, a pesar de que muchas de las políticas gubernamentales lo beneficiaron e incrementaron sus niveles de consumo. En la medida que avanzó el proceso de polarización política de la sociedad y se radicalizó el discurso políticamente excluyente, la mayor parte de los sectores medios se identificaron con los partidos de la oposición. En esa dinámica han emergido nuevos contenidos políticos e ideológicos que han desplazado a los sentidos comunes más o menos socialdemócratas que habían sido hegemónicos en Venezuela desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez en

1958. Estos contenidos políticos, liberales, neoliberales y proestadounidenses han estado acompañados con frecuencia de expresiones de racismo explícito hacia los sectores populares.

### 3.3. Los estudiantes y los jóvenes profesionales

Como se señaló, ha sido extraordinaria la expansión de la matrícula universitaria, lo que ha permitido a millones de jóvenes el acceso a la educación superior gratuita. Como una expresión más de la polarización política de estos años, el estudiantado ha estado dividido entre aquellos que asisten a las nuevas universidades públicas, en especial la Universidad Bolivariana de Venezuela, que tienden, por convenimiento o por conveniencia, a identificarse con el Gobierno, y los estudiantes de las universidades autónomas y privadas, que muy mayoritariamente no solo se identifican con la oposición sino que desempeñan papeles destacados en sus movilizaciones. Los estudiantes de las universidades autónomas, que durante muchas décadas se habían identificado mayoritariamente con la izquierda, hoy tienden a ser liberales.

La expansión de la matrícula y de los graduados universitarios no ha estado acompañada por una correspondiente expansión del empleo de calidad. Como resultado de la inseguridad imperante en el país y de las pocas perspectivas económicas, una proporción significativa de los jóvenes profesionales no ven un futuro favorable para ellos en el país. En consecuencia, se ha producido en estos últimos

3. Gaceta Oficial Nro. 40.845 correspondiente al 10 de febrero de 2016. Decreto N° 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado, bajo la forma de compañía anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

años una importante emigración de jóvenes profesionales. Venezuela, en pocos años, ha pasado de ser un país receptor de migrantes a un país de emigración. Después de Argentina, Venezuela fue durante décadas el segundo país de América del Sur en términos de población nacida afuera.

Como se trata de un fenómeno reciente, comparado con otros países del continente, la proporción de venezolanos que viven en el exterior es baja, no llega a 2 % (OIM). Se trata de una emigración principalmente de sectores medios y de ingresos altos. Con excepción de Colombia, la mayor parte de los emigrantes se trasladan a países lejanos por vía aérea. Los países en los cuales se encuentra en la actualidad concentrada la mayor parte de los venezolanos que viven en el exterior son: Estados Unidos (197 171), España (151 594), Colombia (46 614), y Portugal (23 404) (Ibíd).

En términos generales, hay varias categorías en esta emigración de los últimos años: ingenieros y técnicos petroleros despedidos después del paro petrolero golpista de 2002-2003; migrantes de otros países nacionalizados que después de muchos años deciden retornar a sus países de origen; descendientes de migrantes, sobre todo españoles, que han pasado a tener derecho a recuperar la nacionalidad de sus padres o abuelos; sectores privilegiados que cuentan con suficientes recursos como para vivir bien fuera del país, y, como se señaló, jóvenes, sobre todo profesionales, que deciden rehacer su vida fuera del país. Se ha indicado que esta emigración profesional representa una severa fuga de cerebros que tendrá consecuencias negativas para el futuro. En algunos sectores como la docencia universitaria y la medicina, ya son notorias las consecuencias negativas

que tiene esta emigración para la sociedad venezolana. Tanto en universidades como en hospitales, son comunes las renunciaciones, es frecuente que se llame a concurso para nuevos cargos y que estos queden desiertos por falta de postulantes.

---

**El movimiento sindical,  
históricamente dividido  
en líneas político-partidistas,  
se encuentra hoy debilitado  
y más polarizado que nunca.**

---

#### **4. El mundo popular: movimientos y procesos organizativos**

Como resultado de la polarización política que ha vivido el país en estos años y de algunas políticas gubernamentales, organizaciones de mujeres, sindicatos y organizaciones indígenas se han dividido o se han debilitado en estos años. En Venezuela se había dado una confluencia entre mujeres de un amplio espectro político partidista en la lucha por asuntos críticos tales como la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. En los años del proceso bolivariano se ha dado prioridad a la lealtad político-partidista sobre esta agenda compartida. Mientras se ha avanzado en algunos sentidos importantes como la equidad de género y protecciones en contra de la violencia de género, otros, como el derecho al aborto, prácticamente desaparecieron de la agenda política como consecuencia de las posturas contra el aborto que han sido dominantes en la dirección política predominantemente masculina del chavismo.

El movimiento sindical, históricamente dividido en líneas político-partidistas, se encuentra hoy debilitado y más polarizado que nunca. El Gobierno ha dado prioridad a los aumentos salariales por decretos presidenciales sobre las negociaciones colectivas. Igualmente, ha sido poco tolerante con organizaciones sindicales, incluso aquellas claramente identificadas como de izquierda, que pretendan actuar con autonomía en relación con las políticas del Gobierno. Es de destacar en este sentido la suspensión indefinida de las elecciones sindicales en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en enero de 2016, porque los partidarios del Gobierno tenían pocas posibilidades de ganarlas.

Por otro lado, en estos años se han dado extraordinarios avances en la definición constitucional y legislativa de los derechos de los pueblos indígenas: Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Además, se ha creado por primera vez en la historia del país un Ministerio de Pueblos Indígenas y se han invertido cuantiosos recursos en políticas asistencialistas dirigidas a estos pueblos. Sin embargo, estas políticas, lejos de contribuir al fortalecimiento de la autonomía y a la organización de los pueblos indígenas, al fortalecimiento de sus culturas, y de cumplir con las normas constitucionales en relación con la demarcación de sus hábitats, se han caracterizado por una lógica colonizadora modernizante. El ejemplo más notorio de esta orientación dominante ha sido la creación de consejos comunales indígenas, esto es, la imposición desde

arriba de un modelo organizativo similar al impulsado para el resto de la población del país, que desconoce los patrones culturales y modalidades de autoridad propias. Esto ha conducido a procesos de división y aculturación entre estos pueblos. Ha sido igualmente grave el hecho de que el Estado ha hecho muy poco para defender a los pueblos indígenas del avance de la ganadería y la minería del carbón y del oro sobre sus territorios, actividades que están amenazando su existencia como pueblos.

## 5. Los nuevos procesos organizativos

Las dinámicas organizativas más importantes y ampliamente extendidas de estos años han constituido los nuevos procesos, que han sido producto directo o indirecto de nuevas políticas públicas. En pocos años, Venezuela pasó de ser un país que, aparte de la importante presencia de los partidos políticos, tenía un muy bajo nivel organizativo, a ser un país en el cual millones de personas pasaron a estar involucradas en una amplia modalidad de nuevas formas organizativas: mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, comités de salud, comités de tierras urbanas, consejos comunales y comunas... Sin embargo, estos extendidos procesos organizativos estuvieron desde sus inicios, y con variaciones, atravesados por una importante contradicción entre las aspiraciones y potencialidades de la autonomía y los avances en la dirección de experiencias de autogobierno democrático desde abajo, y el hecho de que la mayoría de estas organizaciones no solo surgieron como iniciativas del Estado, sino que se hicieron en variadas medidas dependientes de la transferencia de recursos públicos y de las orientaciones políticas que les llegaban

desde arriba. Estas tensiones se acentuaron desde el momento en que el presidente Chávez definió al proceso bolivariano como socialista el 30 de enero del año 2005, en el contexto del Foro Social Mundial en Porto Alegre, y llamó a la creación de un partido único. La apertura a la experimentación en la construcción de lo nuevo, que era posible con nociones tan abiertas como ‘revolución bolivariana’ y el anclaje en el ‘árbol de las tres raíces’, comenzó a cerrarse a medida que se consolidaron modalidades de dirección ‘revolucionaria’ cada vez más verticales y sectarias.

## 6. Profunda crisis política y económica

Con la profunda crisis política y económica de los últimos tres años, debida, entre otras cosas, al fallecimiento del presidente Chávez y al colapso de los precios del petróleo, han cambiado en forma muy sustantiva las condiciones del país. Además de la derrota electoral sufrida por el Gobierno en las elecciones parlamentarias del año pasado, todas las encuestas de opinión registran un muy mayoritario rechazo de la población al gobierno de Nicolás Maduro. La combinación de creciente inseguridad, inflación desbordada y la escasez de alimentos y medicinas ha hecho que el día a día de la población sea cada vez más difícil.

Se ha producido un colapso del poder adquisitivo de la población. Las cifras oficiales registran una caída sostenida en el consumo de alimentos en los últimos años (INE, 2014). De acuerdo con algunos cálculos, la inflación entre junio de 2015 y junio de 2016 fue de más de 500 %. El salario solo alcanza para adquirir una pequeña proporción de la canasta alimentaria. Además, niños mueren en hospitales por falta

de medicamentos básicos. De continuar estas tendencias, las conquistas sociales del proceso bolivariano se revertirán. El Gobierno no solo carece de los recursos que serían requeridos para confrontar la crisis, sino que crecientemente responde al descontento y a las protestas sociales con represión y militarización y, con ello, acentúa sus tendencias autoritarias.

Es muy notorio que, a pesar de la rica dinámica organizativa popular de años anteriores y de la construcción de un vigoroso tejido social, en lo fundamental, las respuestas a la crisis no han sido solidarias, colectivas ni organizadas, sino que, por el contrario, han predominado las respuestas individualistas y competitivas. Esto, combinado con el conocimiento que hoy tiene la población de los generalizados niveles de corrupción existentes en el Estado, nos obliga a reconocer la existencia de una profunda crisis ética en el país. Esta crisis está caracterizada en términos dramáticos en el siguiente documento de Cecosesola, titulado *Ética y revolución*, cuyo contenido básico se cita a continuación.

Vivimos en el país del rebusque. Donde vale todo. Donde socialmente se premia la viveza individualista. Donde el honesto se ve obligado a justificar su honestidad para no pasar por pendejo y ser ridiculizado socialmente.

Es así que el ‘vale todo’ se ha venido constituyendo en lo socialmente aceptado. El que no actúa según este molde se convierte en un desadaptado social y el que lo hace se comporta como si el país fuera su propiedad privada, donde puede hacer lo que le viene en gana.

Este proceso se viene cocinando a fuego lento desde hace muchos años atrás, pero en los últimos tiempos da

la impresión de que le hemos puesto el pie al acelerador.

Así nos hemos venido transmutando, sin que muchos nos demos cuenta, en un país donde las leyes van dejando de ser una obligación para convertirse estas en unas simples sugerencias que se toman a conveniencia. Y a pesar de esto, nos empeñamos una y otra vez a intentar enrumbar al país modificando o aprobando un sinfín de leyes.

En nuestro país aceleradamente se va imponiendo una nueva modalidad de propiedad privada al intentar adueñarse cada quien del espacio que se le antoje según su conveniencia. Se va imponiendo el más 'vivo', el más capaz de aprovecharse de las circunstancias para beneficio propio sin tomar en consideración el daño causado al otro, la otra o a lo otro. Estos sólo existen como objetos en función del beneficio personal.

Es así que se va esfumando la ética en cuanto se está perdiendo vertiginosamente el sentido de responsabilidad, la honestidad y la transparencia y por lo tanto el respeto mutuo y la confianza. Progresivamente va emergiendo un individualismo feroz que nutre, a su vez, una sólida base cultural que sustenta un capitalismo salvaje. La propia anomia.

Este es el país que tenemos donde predomina una manera de ser que progresivamente y a través de muchos años nos ha ido penetrando de una u otra manera a todos y todas. Una manera de ser que ante el menor estímulo puede emerger, en funcionarios, empresarios, políticos y por supuesto en el ciudadano común, como en cualquiera de nosotros que intentamos un proceso transformador. Lo alarmante hoy en día es que, en

nuestro país, el 'tumor' parece estar haciendo metástasis. ¿Estaremos acercándonos a un punto sin retorno? (2016).

Esto, por supuesto, no caracteriza a todo el país. Cecosesola y los productores y redes asociadas, sin ir más lejos, constituyen un rico ejemplo -no único- de otras reacciones ante la crisis. Estas reacciones no solo se caracterizan por la solidaridad y por no dejarse derrotar por las dificultades, sino igualmente por dinámicas llenas de creatividad, de experimentación en otras formas de hacer las cosas, de innovación. Todo ello sustentado en el reconocimiento explícito de que el país cambió; de que la lógica del rentismo petrolero dejó de ser sostenible; de que, por ejemplo, los productores agrícolas no pueden seguir dependiendo de semillas importadas y, por lo tanto, tienen que realizar procesos de recuperación e intercambio de semillas. En síntesis, que es necesario comenzar, desde abajo, la construcción de otro país.

Por otra parte, las experiencias y memorias colectivas de organizaciones participativas y de solidaridad no desaparecen de la noche a la mañana. ¿Serán las actuales reacciones individualistas y competitivas modalidades temporales de supervivencia que se dan en momentos particularmente agudos de esta crisis o, por el contrario, se instalarán en la conciencia colectiva como una forma normal de vida? ¿Será posible la recuperación de la esperanza en otro mundo mejor o, por el contrario, para la población venezolana, para el mundo popular, la traumática experiencia de estos últimos años operará por mucho tiempo como un antídoto no solo a alguna idea de socialismo, sino a toda noción de cambio?

Lo que sí es posible afirmar es que un modelo de acumulación, un patrón de

Estado, su sistema Estado-céntrico, y su correspondiente cultura de facilismo rentista han entrado en una crisis terminal. Ni el Gobierno ni un Gobierno de la actual oposición representan opciones creíbles ante esta crisis. Como se afirmó, la sociedad venezolana se asoma a un proceso de transición, pero ¿en qué dirección? ¿Hacia un nuevo modelo extractivista rentista, esta vez basado en la explotación minera en gran escala del llamado Arco Minero del Orinoco? ¿En la dirección de una sociedad democrática post rentista, no patriarcal, no depredadora de la naturaleza, en que el sentido común se desplace de las lógicas clientelares hoy todavía hegemónicas y reconozca que no existen derechos sin responsabilidades?

El futuro está abierto y depende de cómo responda la sociedad venezolana ante los retos y complejas disyuntivas que hoy se le presentan.

## BIBLIOGRAFÍA

Armas, Mayela.

‘Héctor Navarro: Esto no es socialismo... es vagabundería. Fracasó el capitalismo de estado y la corrupción’ en *Aporrea*, Caracas 12 de diciembre 2015.

Cecosesola, Barquisimeto.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2015*. Santiago, 2016.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Indicadores globales de la fuerza de trabajo, según sexo, 1º semestre 1999-1º semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población de 15 años y más económicamente activa, según rama de actividad económica y condición de ocupación, 1º Semestre 1989-1º 1º semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población de 15 años y más ocupada, según sector empleador y rama de actividad económica, 1º Semestre 1989-1º semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población de 15 años y más ocupada, según sector formal e informal y rama de actividad económica, 2º Semestre 1994-1º Semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población de 15 años y más ocupada, según sector empleador y rama de actividad económica, 1989-1º semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población de 15 años y más, económicamente activa, según condición de ocupación y nivel educativo; 1º semestre 2002-1º semestre 2015.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Encuesta de seguimiento al consumo de alimentos (ESCA) Informe Semestral Segundo semestre 2012 al Primer semestre 2014.

Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP).

Venezuela en cifras. Nuestra transición al socialismo. Caracas, febrero 2015.

Organización Internacional para la Migración (OIM).

Flujos globales de migración, disponible en <https://www.iom.int/world-migration>.